

GOVERNO DIGITAL
Acesso e difusão de informações públicas

Organizadores
Patrícia Borba Vilar Guimarães
Yanko Marcius de Alencar Xavier
Ricardo Sebastiàn Piana
Adriana Carla Silva de Oliveira

GOVERNO DIGITAL
Acesso e difusão de informações públicas

Série Inovação no Setor Público | Volume 5



GOVERNO DIGITAL: ACESSO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS

2019 © ORGANIZADORES

Patrícia Borba Vilar Guimarães
Yanko Marcus de Alencar Xavier
Ricardo Sebastián Piana
Adriana Carla Silva de Oliveira

Uma publicação do Grupo de Pesquisa em Direito e Desenvolvimento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PROJETO GRÁFICO

Editora Motres

CONSELHO EDITORIAL

Adriana Carla Silva de Oliveira (TJ/RN, Brasil)
Celso Luiz Braga de Castro (UFBA, Brasil)
Cristina Foroni Consani (UFRN, Brasil)
Fernando Manuel Rocha da Cruz (Portugal)
José Luiz Borges Horta (UFMG, Brasil)
José Orlando Ribeiro Rosário (UFRN, Brasil)
Juan Manuel Velasquez Gardeta (UPV, Espanha)
Maria Raquel Guimarães (Uporto, Portugal)
Maria dos Remédios Fontes Silva (UFRN, Brasil)
Patrícia Borba Vilar Guimarães (UFRN, Brasil)
Ricardo Tinoco de Góes (UFRN, Brasil)
Ricardo Sebastián Piana (UNLP, Argentina)
Sérgio Luiz Rizzo Dela Sáva (CCHLA, UFRN, Brasil)
Yanko Marcus de Alencar Xavier (UFRN, Brasil)

CIP BRASIL — CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

G963g GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar —
Governo digital: acesso e difusão de informações públicas / Patrícia
Borba Vilar Guimarães; Yanko Marcus de Alencar Xavier; Ricardo
Sebastião Piana; Adriana Carla Silva de Oliveira (Organizadores).
1ª edição/Natal - RN. Editora Motres, 2019.
106p.; 14x21cm
ISBN 978-65-5001-085-0
1. Ciências Sociais 2. Gestão 3. Governo digital I. Título.

CDD 300

CDU 003.021

2019 © Todos os direitos são reservados de acordo com as Normas
de Leis e das Convenções Internacionais. Nenhuma parte deste livro
pode ser utilizada ou reproduzida sob quaisquer meios existentes
sem autorização por escrito do autor.



www.emotres.com

@editoramotres

PREFÁCIO

A obra é resultante de pesquisas acadêmico-científicas que versam sobre abordagens contemporâneas entre o Direito e a Tecnologia na atual Sociedade da Informação, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão de processos Institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Enfatiza as questões de Direito Digital e a interface com temáticas emergentes que tratam de gênero, virtualização, governo eletrônico, transparência pública, ética e gestão pública, que permeiam as instituições governamentais e impactam na sociedade em geral.

Traz a colaboração científica internacional com o capítulo que aborda o direito ao acesso à informação pública como fundamento do Direito Humano à Informação.

Ademais, os trabalhos são ricos em suas abordagens teóricas e legais corroborando com as atuais discussões no âmbito acadêmico e jurídico.

Convido a todos para uma reflexão jurídica sobre os capítulos que consubstanciam a referida obra.

Prof^a. Dr^a. Adriana Carla Silva de Oliveira

Analista Judiciário do TJRN. Professora Colaboradora do Mestrado Acadêmico da Pós-Graduação em Direito e do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais da UFRN.

SUMÁRIO

Déficits normativos e institucionales en el derecho de acceso a la información pública en la Provincia de Buenos Aires. La construcción judicial de un derecho humano	9
Ricardo Sebastián Piana Fernando Amosa	
O direito à inclusão do gênero feminino nas STEM e a gamificação como ferramenta educacional: o caso da plataforma NINACODE	38
Mariana Noely Chacon Vianna Thaisi Leal Mesquita de Lima Patrícia Borba Vilar Guimarães	
Gestão pública e governo eletrônico: os processos institucionais na UFRN	61
Neyjmme de Fátima Medeiros	
A virtualização do processo avaliação especial de desempenho dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seus desdobramentos	69
Suziane Rodrigues Bezerra Yanko Marcus de Alencar Xavier Patrícia Borba Vilar Guimarães	
A percepção do novo servidor técnico-administrativo da UFRN quanto ao uso ético e transparente de dados públicos	82
Jazon Paulino Lisboa Moreira Sergio Luis Rizzo Dela Savia	
Trabalho, serviço público e inserção de gênero	91
Acácia Jéssica Maia de Moura Patricia Borba Vilar Guimarães Adriana Carla Silva de Oliveira	
Processos administrativos à luz do governo eletrônico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)	102
Adson Araceli Alves Dantas André Morais Gurgel	

Déficits normativos e institucionales en el derecho de acceso a la información pública en la Provincia de Buenos Aires. La construcción judicial de un derecho humano.

Ricardo Sebastián Piana

Fernando Amosa

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO DERECHO

El derecho de acceso a la información pública tiene como derecho fundante el derecho humano a la información, necesariamente vinculado a los derechos de libertad de pensamiento y de expresión. En el caso de la información pública, este derecho es un derecho humano, ciudadano y colectivo, basado en el derecho a petición y la obligación de transparencia de la actividad gubernamental, que tiene por principal obligado al Estado.

Decimos que el acceso a la información pública es un derecho humano porque está vinculado con el derecho de todo individuo a recibir ideas e información, elaborarlas y difundirlas, permitiendo la concreción de un ámbito personal de autorealización individual y colectiva¹ y decimos que es un derecho ciudadano porque sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia al ser condición para garantizar otros derechos, en particular el de la participación ciudadana en la gestión pública y el control del gobierno².

1 Como veremos, el carácter de derecho humano ha sido reconocido por la Corte Interamericana de derechos humanos en Corte IDH, "Claude Reyes y otros vs. Chile", Sentencia de 19 de septiembre de 2006.

2 Entendido en su dimensión ciudadana el derecho de acceso a la información pública es un derecho político asentado en ciertas características sobre las que se asienta el régimen republicano (la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración) y el sistema democrático (participación y libertad para seleccionar las diferentes opciones políticas). Publicizada la concepción, aparece como fundamento del acceso a la información en poder del Estado, la prerrogativa que tiene todo individuo de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan así como el destino del dinero público. La propiedad de la información no es del Estado, sino que le pertenece a los ciudadanos, y la posesión de la misma por parte del Estado sólo se justifica en su carácter de representante de la ciudadanía.

Afirmamos que es un derecho colectivo porque la información a la que se accede es un bien público no individual³ que se brinda no sólo a quien la solicitó y que puede libremente difundir quienes a ella acceden⁴.

Dado que el acceso a la información pública, como su eventual difusión, le brinda al ciudadano la posibilidad de desarrollar un pleno ejercicio cívico⁵, pilar elemental para sostener las bases democráticas, cualquier restricción al libre acceso debe estar expresamente prevista, fundada en los ordenamientos jurídicos y acreditado el interés público en la no difusión⁶.

Cabe destacar que en la arquitectura constitucional de los sistemas democráticos contemporáneos, la división de poderes constituye uno de los pilares cardinales para el ejercicio del control del poder, pero no puede agotarse en él: el otro cimiento está conformado por los derechos fundamentales que viabilizan el campo de acción de la

3 Sólo se justificaría un perfil individual del derecho en el caso concreto de acceso a los archivos y bancos de datos estatales cuando se requiere conocer información relativa a un dato personal ya que en este caso es “su propia información” o la información de datos inherentes a su persona y no es un “bien colectivo”; no pertenece a la cosa pública aunque dichos datos puedan obrar en archivos estatales y tener la calidad de documento público. Pero entendemos que no debe confundirse el instituto que estamos estudiando con el del acceso y/o rectificación del dato personal (y eventual supresión de datos sensibles) que tienen su propio régimen legal y de protección, Ley N° 25. 326.

4 Según Basterra (2017) se encuentra en el plano de los “derechos-autonomía” que tienden a potenciar el ámbito de autonomía de los individuos a efectos de lograr su plena realización, que se dará en orden a la posibilidad de concreción del plan de vida que eligió cada uno. Cumple con una indudable función maximizadora del espacio de autonomía personal, posibilitando la libertad de expresión mediante la estimulación del pensamiento: al acceder a mayor información se toma contacto con una diversidad de opiniones y voces susceptibles de influir o ser determinantes al momento de elegir nuestro proyecto de vida.

5 El resguardo de ambos derechos, acceso y difusión, permite a la vez proteger la libertad de pensamiento y de expresión, necesitando ambas a la información para estimular el pensamiento y la reflexión, en el caso particular, sobre los asuntos públicos. De ahí, como señaláramos, su carácter de derecho humano.

6 Como ha señalado Vallefin (2009), en materia de información pública el acceso constituye la regla por lo que la negativa a suministrarla debería estar sujeta a un test tripartito: 1) la información debe relacionarse con un fin legítimo estipulado en la ley, 2) la divulgación debe amenazar con causar un perjuicio considerable a dicho objetivo y 3) el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público de tener esa información.

ciudadanía que por medio del voto y la participación en la gestión pública ejercen el último control⁷.

El escrutinio de la ciudadanía sobre el desempeño de su gobierno no puede presuponerse a partir de la mera división de poderes y dispersas manifestaciones republicanas como la publicidad de los actos de gobierno, los debates o el inicio de las sesiones parlamentarias⁸. Para que la ciudadanía tenga capacidad de emitir un juicio sobre los asuntos públicos debe tener acceso a los elementos necesarios para llevarlo a cabo de manera razonada e informada y la posibilidad de que su opinión sea divulgada y confrontada con la de otros individuos⁹.

Así como el principio de razonabilidad del Estado se traduce en el derecho ciudadano a la no arbitrariedad del poder, visto el acceso a la información pública no ya como expresión garantística del principio de transparencia de la gestión, sino como derecho ciudadano colectivo, puede ser estudiado como derecho ciudadano a la ética en la gestión pública o derecho a la “no corrupción”¹⁰. En esta línea se caracteriza como un derecho público subjetivo en favor de los gobernados que impone deberes a los órganos estatales, puntualmente de

7 En efecto, la división de poderes, más bien su distribución a través de órganos diferenciados, supone la fiscalización mutua y la colaboración para la toma de las decisiones colectivas. Pero en este esquema clásico, el ciudadano permanecía excluido del proceso inter-poderes. Sólo con la ampliación de la participación ciudadana de la mano de los partidos de masas, el voto y más tarde los institutos de democracia semidirecta, se han consolidado como el otro eje del control, el democrático, que se suma al republicano. Y es en estos últimos años que se va consolidando, como derecho, la participación en la gestión pública que también supone el acceso de la información pública.

8 Basterra (2017) califica a este sistema a todas luces insuficiente y débil. El acceso a la información oficial debe ser en todos los casos la base de rendimiento de las cuentas públicas ya que sólo así se podrá disponer de un catalizador que permita un auténtico control democrático sobre las ramas del poder estatal.

9 Sin posibilidades reales de tener acceso a la información para formar sus propios criterios relativos a la gestión estatal, esto es, sin capacidad para distinguir y juzgar políticas públicas, lo que hay es mera opinión pública que, como sabemos, puede ser fácilmente guiada no sólo por los detentadores del poder sino también por contrapoderes fácticos.

10 La construcción del derecho colectivo a la no corrupción tuvo desarrollos interesantes doctrinarios. Inicialmente expuesto por Luis Carello en 1998, pero continuado por otros como Gordillo (2009, 2017) y Buteler (2012), entre otros, ha sido planteado como derecho humano y derecho colectivo.

realizar su gestión pública en el ámbito administrativo con apego a la legalidad y ética en la gestión¹¹.

EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PLEXO NORMATIVO JURISPRUDENCIAL ARGENTINO

El derecho de acceso a la información pública, si bien de reciente cristalización en un complejo normativo, reconoce sus antecedentes en clásicos derechos que hoy forman parte del derecho convencional de derechos humanos.

El art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); el art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el inc. 2º del art. 19 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el inc. 1º del art. 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) refieren al derecho a la información en sentido amplio¹². En el sistema americano de protección de los derechos humanos, respecto del artículo 13

11 Ello abre las puertas a la problemática de la “transparencia”, por un lado, y por el otro al acceso directo a las fuentes primarias de información. La idea de la transparencia administrativa, caracterizada por una evidente carga axiológica, contribuye a la legitimidad de las administraciones, ya que posibilita su permanente control. Mediante la visibilidad, cognositividad, accesibilidad y, por lo tanto, posibilidad de control de los actos de gobierno, se refuerza el concepto de legitimidad democrática. En esta tesitura se inscribe la línea argumental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al destacar que el derecho a la información pública es un elemento de legitimidad para el poder administrador estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno. Lo que además *“es consistente con la noción de democracia deliberativa, porque los términos de la cooperación que propone son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación mutua. En este sentido, el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio a lo que todos aspiramos, es decir vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia”* (CSJN, 2016, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, consid. 18 del voto de mayoría).

12 Libertad de opinión, incluyendo el de no ser molestado y de difundirlas; libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento; libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo buscar, recibir y difundir; libertad de expresión incluyendo la de buscar, recibir y difundir; igualdad en el acceso a la información y las comunicaciones, respectivamente.

inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que también consagra el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

77. ... la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (Corte IDH, “Claude Reyes y otros vs. Chile”, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, p. 43)¹³.

Queda entonces, a partir de este fallo, claramente configurado el derecho de acceso a la información pública como derecho humano reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica.

En el ámbito nacional, la reforma constitucional de 1994, además de incorporar estos tratados al bloque de constitucionalidad, fijó algunas pautas dispersas respecto al derecho de acceso a la información pública. En el capítulo segundo “Nuevos derechos y garantías” de la primera parte de la Constitución aparece el derecho a la infor-

13 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

mación y el correlativo deber estatal de proveerlo en lo referente a partidos políticos, medioambiente y derecho del consumidor. Así, el art. 38 indica que se les garantiza a los partidos políticos, entre otros, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas; el art. 41 manda que las autoridades proveerán información y educación ambientales para gozar del derecho a un ambiente sano y equilibrado; por último, el art. 42 reconoce a los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho a una información adecuada y veraz, derecho éste que también puede ser incoado frente al Estado.

También resulta relevante reseñar la Carta Democrática Interamericana (2001) que reconoce como uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia a la transparencia de las actividades gubernamentales y por otro, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996)¹⁴, que en el Artículo III inc. 5 promueve la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003),¹⁵ que en su artículo 10 sugiere a los Estados adoptar diversas medidas para aumentar la transparencia en su administración pública, incluyendo lo relativo a la organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones¹⁶.

Sin que tengan obligatoriedad normativa, pero marcando un código deontológico de fuerte legitimidad en materia de buenas prácticas en la gestión gubernamental, los documentos elaborados por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)¹⁷, tienen particular relevancia. Bajo su propuesta,

14 Esta Convención fue aprobada por Ley N° 24.759.

15 Internalizada por Ley N° 26.097.

16 Entre otras, señala: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.

17 El CLAD es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental que se constituyó en el año 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela y su creación fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones

los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, incluyendo los de Argentina, han aprobado en las diversas Cumbres documentos internacionales referentes a la función pública, el gobierno electrónico y el gobierno abierto, entre otras temáticas¹⁸. En ellos y, con creciente interés, el acceso a la información pública aparece como uno de los pilares del buen gobierno, especialmente a partir de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública donde un capítulo está dedicado al “Acceso a la información pública para la participación ciudadana”. A partir de la consolidación a nivel mundial de las políticas de gobierno abierto¹⁹ a través de la Alianza para el Gobierno Abierto²⁰, el

Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las Administraciones Públicas como factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Institucionalmente es la Secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado que se realizan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.

18 Entre ellos señalamos la Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada en Bolivia en 2003, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, aprobado en Uruguay, en 2006, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada en Chile, en 2007, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, aprobada en El Salvador, en 2008, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada en Portugal, en 2009, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, aprobada en Panamá, en 2013 y la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada en Bogotá, en 2016, entre otros.

19 El llamado gobierno abierto, más allá de toda conceptualización, tiene enormes implicancias prácticas, al punto que es el entorno de ejecución de un conjunto de medidas que si bien no son todas tecnológicas, se sirve de estas últimas para desarrollarse mediante las potencialidades que ofrecen. En el gobierno abierto subyace la idea de abrir al público, en forma libre y gratuita, los datos, añadiendo nuevos mecanismos de participación e incorporación de los sectores no gubernamentales. La tecnología aparece en el escenario contribuyendo a una nueva relación y forma de gobernar, lo cual implica la “apertura” mediante canales de comunicación, fomentándose de este modo la transparencia. El gobierno abierto implica una relación de “doble vía” entre ciudadanía y Estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicación de las tecnologías de la información y el conocimiento que facilitan múltiples interacciones entre actores sociales y estatales, cristalizando en vínculos más transparentes, participativos y colaborativos. Supone ampliar la esfera de lo público, abrir la “caja negra del Estado” (conf. Ivanega, 2016) mediante la participación y protagonismo del ciudadano; transparentar la gestión, admitir un mayor protagonismo para la ciudadanía en la administración del gobierno y expandir las posibilidades de brindar más y mejores servicios a través de un mejor acceso a los sistemas de información. Para una mayor conceptualización, véase Oszlak y Kaufman (2014).

20 <https://www.opengovpartnership.org/>

acceso a la información pública se encuentra hoy en el centro de las temáticas para el buen gobierno²¹.

En nuestro país el acceso a la información pública estuvo relegado, durante mucho tiempo, a la mera publicidad de los actos de gobierno, aunque uno y otro no deben confundirse²². Este fundamental principio del republicanismo, el de la publicidad de los actos de gobierno, fue generalmente asociado a la publicación en el Boletín Oficial de los resultados de la toma de las decisiones de los distintos poderes (leyes, decretos, sentencias, versiones taquigráficas de los debates, etc.). Este hacer conocer es evidentemente muy limitado pues no permite sino sólo un control limitado y *ex post*.

Argentina era uno de los pocos países en la Región que no contaba con una ley específica en la materia²³. Desde fines del 2003 estuvo en vigencia el Decreto n° 1172/03 de Acceso a la Información Pública, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación había marcado

21 Esta iniciativa tiene a Argentina como uno de los países con mayor despliegue en los últimos años en cuanto a iniciativas. De los actuales 44 compromisos asumidos por nuestro país, la mayoría se corresponde con los de acceso o difusión de la información pública.

22 En efecto, no debe confundirse el derecho de acceso a la información pública con la publicidad de los actos de gobierno. Según Ekmekdjian (1994:151), se entiende por publicidad el “*deber de comunicar los actos de gobierno a la opinión pública, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de tomar conocimiento de aquellos, de su contenido, de su gestación y concreción, y ejercer el control del poder que les compete*”. El acceso a la información pública, en cambio, es un derecho más amplio: incluye información que tiene el Estado y que por no traducirse en actos administrativos, insumo principal de los Boletines Oficiales, no tiene, en principio, la obligación de publicar; nace a partir de la petición ciudadana; supone, a su vez, la posibilidad de difundir esa información, reagrupar y/o producir conocimiento. Por otro lado, mientras que la publicidad de los actos de gobierno tiene su base en el sistema republicano (Díaz Cafferata, 2009), el derecho de acceso a la información pública tiene raigambre en los principios del sistema democrático.

23 Sin embargo, pueden destacarse algunos antecedentes legales, tales como las Leyes N° 24.065 y 24.076 (marcos regulatorios de electricidad y gas); la Ley N° 24.240 (Defensa al Consumidor); la Ley N° 25.152 (convertibilidad fiscal); la Ley N° 25.188 (Ética en la Función Pública), la Ley N° 25.675 “Ley General del Ambiente”.

un déficit tanto normativo²⁴ como en la práctica de su cumplimiento por diversos Organismos del Ejecutivo²⁵.

Luego de varios proyectos de ley que intentaron modificar este déficit, el actual Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, aprobado y promulgado en 2016 como Ley N° 27.275. Entre los fundamentos, se sostiene que el proyecto se enmarca en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y en el derecho de acceso a la información pública derivados de los artículos 1°, 33 y 38 de la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos a los que el artículo 75 inciso 22 les otorga jerarquía constitucional.

La Ley regula el acceso a la información pública en todas las áreas del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo

24 De todas formas, en este período debe destacarse que en el ámbito nacional, antes de la actual Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, y a partir de este marco normativo, se dio una considerable proliferación de normas que prevenían el acceso a la información pública sin llegar a constituir un régimen integral de alcance general, sino que se circunscribieron al ejercicio de ese derecho en sectores o ámbitos específicos o que reconocían este derecho en la esfera de su regulación. Entre ellas, la Ley N° 25.831 (Régimen del Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), la Ley N° 26.047 (Acceso a la información de registros nacionales de sociedades, asociaciones y fundaciones), la Ley N° 26.331 sobre "Protección ambiental de los bosques nativos", la Ley N° 26.522 (de radiodifusión); y a nivel del Ejecutivo, entre otros, los Decretos N° 378/05 (Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales); y N° 616/10 (reglamentario de la Ley de Migraciones N° 25.871).

25 Pueden destacarse el caso "Asociación por los Derechos Civiles c/ PAMI" de 2012, donde la Corte nacional sostuvo que *"El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información; toda vez (...) que 'la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para promover el respeto a ese derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva"*. En 2014, insistió con este argumento en el caso "CIPPEC C/ Min. de Desarrollo Social- dto. 1172/03, Amparo ley 16.986" y obligó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) a brindarle a una organización de la sociedad civil datos solicitados en 2008 sobre transferencias en concepto de "Ayuda social a las personas" que había solicitado y que el Ministerio que había negado aduciendo que los mismos eran datos sensibles. Un breve pero interesante análisis a estos casos y otros, puede ampliarse en Berardi (2018).

y el Poder Judicial, organismos centralizados, descentralizados, empresas y sociedades estatales y cualquier otra entidad privada a la que se le haya otorgado subsidios o aportes del Estado Nacional, entre otros. Se clarifica el alcance de la información pública y enumera de modo preciso las circunstancias y procedimientos que permiten denegar los pedidos de información. Dos artículos del texto son clarificadores del alcance de la norma:

Artículo 2°. Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, re-procesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente Ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta Ley.

Artículo 4°. Legitimación activa. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.

Si bien no es materia de este artículo un examen de la Ley nacional²⁶, aspectos loables de la misma²⁷ se han visto opacados por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 746/17 en cuanto modifica las competencias de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la que pasó a estar en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dependiendo ahora de ésta el diseño de su estructura orgánica y la

26 Para un análisis más profundo de la norma, nos remitimos a Basterra (2017); Vallefín y López (2017), Funes y Rivas (2016), Gelli (2016), entre otros.

27 Algunos de los principios que determina la ley, además del de legitimidad activa amplia y transparencia activa, son los de presunción de publicidad de toda la información en poder del Estado; informalismo en las reglas para acceder a la información; máximo acceso, esto es, la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles; apertura (accesible en formatos electrónicos abiertos); no discriminación; máxima premura; gratuidad; responsabilidad; facilitación; buena fe e “*In dubio pro petitor*”, es decir, siempre debe estarse en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

designación a su planta de agentes. Esta dependencia normativa (y política) limita, sin lugar a dudas, la autonomía funcional del nuevo Organismo y los aspectos de control allí previstos^{28, 29}.

ESTADO ACTUAL DE LA NORMATIVA REFERENTE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El derecho de Acceso a la Información Pública tiene base constitucional en nuestra Provincia. La Constitución local reconoce este derecho de los ciudadanos en el art. 12° inc. 4 cuando enumera que *“Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos (...) 4) A la información y a la comunicación”*. Asimismo, cabe destacar que es deber constitucional de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política. Al igual que en la Constitución Nacional, en materia medioambiental, el art. 28 garantiza el derecho a solicitar y recibir adecuada información, el 38 el derecho de los consumidores y usuarios a

28 Para garantizar que la norma se aplique, la ley prevé varios mecanismos. En primer lugar, la denegatoria debe hacerse por vía de resolución por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida que, como tal debe fundarse. Además, el silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos previstos (15 días hábiles prorrogables excepcionalmente por otros 15), así como la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, son considerados como denegatoria injustificada a brindar la información. En ese caso, se abre directamente la posibilidad de recurrir ante la justicia sin necesidad de agotar la vía administrativa (arts. 11, 13 y 14 de la Ley). Además, a la Agencia de Acceso a la Información Pública, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa (Capítulo IV del Título I de la Ley), se le encomienda entre las funciones más destacadas, la de implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas así como requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a la normativa aplicable así como intervenir, administrativamente ante reclamo del interesado (arts. 14, 15 y 24 de la Ley).

29 Otro aspecto que merece una mayor revisión es haberle asignado a la Agencia, a través de este DNU, competencias en materia de protección de datos personales, entonces a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia. Ambos derechos, de igual raigambre constitucional, pasan a depender de un único organismo que ha sido creado, fundamentalmente, para garantizar el acceso a la información pública mientras que los aspectos vinculados a la protección de datos personales se orientan tanto al sector público como privado.

una información adecuada y veraz y el 59 el acceso a la información pública a los partidos políticos. También su art. 43 manda la transferencia de los resultados de la investigación científica y tecnológica efectuada con recursos del Estado y la difusión de los conocimientos y datos culturales mediante la implementación de sistemas adecuados de información.

En el ámbito bonaerense no se cuenta aún con un régimen integral de Acceso a la Información Pública³⁰. No obstante ello, existe un régimen legislativo limitado al “Acceso a los documentos administrativos” el cual adolece de ciertas limitaciones que seguidamente analizaremos.

En los fundamentos presentados de la que sería aprobada como Ley N° 12.475 se señala que ...

La presente iniciativa (...) pretende resguardar tanto la publicidad de los actos de gobierno, como la efectiva vigencia de la seguridad jurídica. Constituye, en consecuencia, una forma explícita de asegurar la subordinación de la actividad estatal a la Constitución, que es uno de los pilares básicos y fundamentales del estado de derecho. Sin perjuicio de ello creemos que el proyecto también encuentra sustentación en dos necesidades sociales igualmente relevantes: la reforma y modernización de las estructuras estatales y la exigencia de la transparencia de los actos públicos³¹.

Como hemos señalado, no regula un sistema de acceso a la información pública generada, en trámite o en guarda por el Estado, sino solamente crea un ámbito normativo que permite el conocimiento de cierta información generada por el Estado que se encuentre plasmada en un documento administrativo³².

30 Es importante destacar que una instancia que parece compatible con el acceso a la información y la Participación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, es la Ley N° 15.569 sobre audiencias públicas. Asimismo,

31 La adscripción de la norma no sólo a los principios de publicidad de los actos de gobierno y la seguridad jurídica sino también a la transparencia y reforma y modernización resulta muy interesante para ese momento, año 1999, aprobada en el 2000. Expediente Origen: D- 534/98-99 presentado por Mario Luis Espada.

32 Esto es, regula una especie en un género mucho más amplio.

En efecto, la Ley reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo el derecho de acceso a los documentos administrativos a los que define en su art. 2° como *“toda representación gráfica, fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado Provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la Ley”*.³³

Respecto al interés legítimo³⁴, que constituye uno de los principales obstáculos de la norma, la Ley requiere que la solicitud de acceso a los documentos debe ser fundada mediante presentación por escrito firmado en el que consten los datos identificatorios personales del solicitante y ante la dependencia oficial que ha conformado el documento o lo retiene en su poder (conf. art. 5°).

El derecho se puede ejercitar mediante el *“examen de las actuaciones y la extracción de copias”* (art. 3°) y si bien se dispone que el examen de los documentos es gratuito, luego se indica que la expedición de copias de cualquier naturaleza está subordinada al pago de un arancel que no puede ser superior a los gastos operativos que demande la obtención de las mismas (art. 4°).

El plazo para contestar el requerimiento es de hasta treinta días hábiles. Si transcurre dicho plazo, la solicitud se entiende denegada. Frente a tales supuestos, en virtud de la existencia de una inactividad, la vía a utilizar por el ciudadano debería ser el recurso administrativo³⁵ o el amparo por mora³⁶; sin embrago, tanto para el caso de denegación táctica como expresa la ley habilita la interposición de la acción de amparo³⁷ o *habeas data* según corresponda³⁸.

33 La enumeración de los distintos medios lo que pretende hacer es desvincular la información de sus soportes y así podría incluirse información presente, por ejemplo, en las viejas tarjetas perforadas.

34 Es decir, quien tenga interés simple no puede solicitar acceso a los documentos en los términos de esta Ley. La actual Ley Nacional, a modo de comparación con los términos de esta Ley, señala que *“Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”* (Ley N° 27.275 art. 4°).

35 Entendemos que aún cuando se reconozca agotada la vía administrativa, ello no limita a que el interesado pueda utilizar las vías administrativas que crea pertinentes.

36 Prevista en el art. 76 de la Ley N° 12.008 (texto según Ley N° 13.101)

37 Prevista en el art. 20, inc. 2°, de la Carta Magna local y en la Ley de Amparo N° 13.928.

38 El procedimiento de Habeas Data provincial tiene regulación como “proceso

Con relación a los límites se establece “*que el derecho de acceso puede ser vedado cuando se trate de actos preparatorios y en aquellos supuestos en que su divulgación pudiere perjudicar el derecho de privacidad de terceros o afectar su honor*” (conf. art. 6°).

Aunque no surja en forma expresa y clara debe entenderse que los alcances de la Ley incluyen a todos los poderes del Estado provincial y sus municipios³⁹, entes autárquicos y descentralizados y hoy necesariamente incluirse a las empresas con participación estatal mayoritaria.

A nivel del Poder Ejecutivo, la primera vez que aparece este deber por parte de los funcionarios es con la ley de Ministerios, Ley N° 13.175, aprobada en 2004. Allí se establecía entre las funciones comunes de los ministros secretarios la de ...

– facilitar el ejercicio del derecho a la información previsto en la Constitución local, organizando áreas para recibir, procesar, sistematizar y elevar, con rapidez y eficiencia toda propuesta, reclamo, pedido y opinión útil para la formulación, implementación, control de gestión y evaluación de políticas, planes y cursos de acción que provengan de la ciudadanía en general, de sus ins-

constitucional” mediante la Ley N° 14.214. Sobre todo hay que tener en cuenta que el régimen previsto tiene aplicación respecto de los titulares y/o responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados a dar informes, administradores y responsables de sistemas informáticos; conceptos que a su vez son definidos y hay que recoger de la Ley Nacional N° 25.326 y su Decreto Reglamentario N° 1558/01 sobre Protección de los Datos Personales. En la actualidad y en el contexto del Programa Justicia 2020 llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación existe un nuevo proyecto de ley nacional que puede verse en <https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anteproyecto-de-ley-PDP.pdf>. Asimismo la Ley 14.214 de la Provincia, establece la jurisdicción y competencia del Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires. Cabe agregar que la ley señala en su artículo 20 que será de aplicación cuando quien tenga legitimación activa sea afectado por la Ley N° 12.475.

39 Dado que aún no gozan en Buenos Aires de la autonomía que les garantiza la Constitución Nacional. La actual Ley Orgánica de Municipalidades nada dice al respecto aún cuando hay que reconocer que varios municipios cuentan con normativa específica o que reconocen, en el marco de otras políticas, el derecho ciudadano a acceder a la información pública.

tituciones representativas y de cada uno de los habitantes de la provincia en particular (art. 9º inc. 4);

– confeccionar y difundir la agenda sistémica de su cartera (art. 9º inc. 5);

– asegurar la transparencia de la función pública, difundiendo el detalle de la utilización de los recursos y el estado del gasto en el ámbito de su jurisdicción (art. 9º inc. 6º);

– facilitar, a través de los mecanismos apropiados, la participación ciudadana (art. 9º inc. 7º).

La actual ley de Ministerios, Ley N° 14.989, nada dice al respecto. Sin embargo, aún se encuentra vigente para el ámbito del Ejecutivo el Decreto reglamentario N° 2549/04. Dicho Decreto pretende crear un sistema idóneo, eficiente y eficaz para hacer operativa Ley N° 12.475.⁴⁰

El Decreto señala que toda persona física o jurídica⁴¹ tiene derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública⁴² y reconoce, ahora sí, que éstos pueden estar o ser generado por organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo, quienes deberán organizar áreas destinadas específicamente a permitir el acceso, consulta y eventual reproducción de documentos administrativos de su competencia, pudiendo dictar sus propias normas de procedimiento en la medida que favorezcan y no perjudiquen los derechos y garantías ya consagradas (conf. art. 3º).

En el Anexo del Decreto, donde se establece un Reglamento General de Acceso a Documentos Administrativos del Poder Ejecutivo, se consagran los siguientes principios del procedimiento de acceso:

40 La norma también preveía iniciar una instancia de consulta pública con el objeto de revisar los alcances de la Ley N° 12.475 a fin de garantizar en la forma más amplia y razonable posible el derecho de acceso a la información pública, temática que incluía en la Mesa del Diálogo para la Reforma Política, creada por Decreto N° 1786/04.

41 El que “toda persona” sin más adjetivación tenga derecho de acceso a documentos administrativos puede hacer suponer que ya no se exige un interés legítimo, es decir, que la norma regulatoria es más amplia que la ley que reglamenta. Así lo consideró la Suprema Corte bonaerense en los autos “*Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley*” como más adelante analizaremos.

42 En el art. 3 del anexo del Decreto reproduce la definición de la Ley sobre documento administrativo.

- Publicidad: Se presume pública toda información producida por los sujetos legitimados pasivos, así como la obtenida por los mismos. No se consideran públicos los documentos administrativos cuya divulgación pudiere perjudicar el derecho de privacidad de terceros o afectar su honor.
- Celeridad: Los sujetos obligados deben dar respuesta a los pedidos de acceso a documentos administrativos lo más pronto posible.
- Informalidad: El procedimiento de acceso debe desarrollarse sin más condiciones que las expresamente establecidas y aquellas otras que por razones de carácter estrictamente operativo, orientadas a facilitar y no entorpecer el acceso, sean dictadas por cada uno de los sujetos obligados.
- Accesibilidad: Los sujetos legitimados pasivos se encuentran obligados a proveer a una adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un fácil y amplio acceso.
- Igualdad: Los sujetos obligados deben observar y respetar el principio de igualdad en los procedimientos para el acceso a documentos administrativos.
- Gratuidad: El examen de los documentos administrativos es gratuito. Los costos de reproducción son a cargo del solicitante.

El listado de las excepciones es amplio, aunque exige que la denegatoria deba ser fundada y resuelta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a director provincial⁴³.

43 Así prevé que el derecho de acceso a los documentos administrativos no se otorgará cuando: a) se trate del examen de actos preparatorios; b) la divulgación de ellos pudiera perjudicar el derecho de privacidad de terceros o afectar su honor; c) se trate de información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior; d) sea información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario provincial; e) se involucre secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; f) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; g) información preparada por los sujetos legitimados pasivos, dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquéllos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos; h) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del de-

Los sujetos pasivos están obligados a permitir el acceso a documentos administrativos en el momento en que les sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor a ocho días en el estado en que se encontraren sin estar obligado a procesar o clasificar la información. Si transcurren treinta días hábiles sin que la autoridad competente brinde una respuesta al pedido de acceso a documentos administrativos o la misma fuese parcial, ambigua o inexacta, la solicitud se considera rechazada y se reconoce la posibilidad de interponer los recursos administrativos y/o acciones que el ordenamiento jurídico permita.

No entendemos que el pedido de vista amplio, introducido por la Ley N° 14.229 de 2011 a la Ley de procedimiento administrativo, sea un caso particular del Acceso a la Información Pública sino que son institutos jurídicos distintos aún cuando en sus efectos puedan tener similitudes⁴⁴. En efecto, el pedido de vista sólo se reconoce a la parte interesada y tiene efecto suspensivo de los plazos impugnatorios⁴⁵, mientras que la solicitud de acceso a documentos administrativos requiere la acreditación de *interés legítimo* y no suspende plazo alguno. El concepto de *interés legítimo* de la Ley N° 12.475, a pesar de lo limitado, es mucho más amplio que el de *parte interesada* contenido en la Ley de procedimiento administrativo, pues supone derecho o interés legítimo más inicio de actuaciones ante la admi-

bido proceso; i) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional; j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona; k) se trate de información protegida por leyes especiales (conf. arts. 16 y 18 del Anexo). 44 Art. 11 de la Ley N° 7.647 según Ley N° 14.229: “*La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite, pudiendo, a su cargo, copiar o fotocopiar todas sus partes. El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o receptoría. El párrafo anterior del presente artículo será exhibido en todas las reparticiones de la Administración centralizada, descentralizada y entes autárquicos al público*”.

45 Sobre este último efecto, en 2014, la Suprema Corte de Buenos Aires en “*Müller, Gustavo Gastón c. Provincia de Buenos Aires y otro s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley*” reconoció que si bien el régimen de procedimientos administrativos no contiene una previsión expresa que confiera al pedido de vista el efecto automático o *ex lege* de suspender plazos impugnativos, los órganos de la Administración deben asignarle esa eficacia en virtud de la amplitud del derecho de libre acceso al expediente de la parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante.

nistración y que el carácter de parte sea reconocido por ésta como tal (art.10º Ley Nº 7.647). Más aún, dado que la Ley Nº 7.647 señala que quien peticione con el objeto de lograr una decisión de la Administración comprendida en las facultades potestativas no será tenido por parte en el procedimiento⁴⁶, a éste le puede ser negado el pedido de vista mientras que puede haber interés legítimo para acceder a información sobre qué hace la Administración con sus facultades potestativas pudiendo utilizar los recursos procedimentales de la Ley Nº 12.475.

Finalmente, podemos destacar la Ley Nº 14.828 sancionada en 2016 que aprobó el Plan Estratégico para la Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los ejes de la reingeniería del Estado Provincial es el de mejorar la gestión pública a través de, entre otros, la reingeniería de procesos y sistemas de información de cada organismo y la promoción de la articulación entre éstos, lo que no sólo implica la interoperabilidad, esto es, que las áreas estatales puedan leer e intercambiar información, sino poder plasmar el derecho del ciudadano al único canal de entrada o “ventanilla única” para acceder a la información en poder del Ejecutivo sin necesidad de ir organismo por organismo⁴⁷.

En esta línea se inscribe el Decreto Nº 805/16 que crea el portal de datos abiertos de la Provincia entre cuyos antecedentes que menciona se encuentra la Ley Nº 12.475 y su Decreto Reglamentario, aunque sin pronunciarse explícitamente en qué medida la apertura modifica el estado normativo de la cuestión⁴⁸.

46 Conf. art. 10º Ley Nº 7.647.

47 Su Decreto reglamentario, Nº 1.018/16, prevé que el Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA) operará como plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes digitales creados por medios electrónicos, registros y otros contenedores a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento de cada expediente.

48 Entre sus considerandos hace una expresa mención al Acceso a la Información Pública al señalar “*Que resulta ser una política pública del actual gobierno promover el derecho de acceso a la información pública, cuyo contenido evoluciona progresivamente desde su formulación clásica, promoviendo una adecuada publicidad de los actos que importa una práctica que atañe a la “buena administración”. La mencionada publicidad coadyuva a la transparencia de la gestión pública, fortalece la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado, facilita los controles del obrar público y estimula la eficiencia y la efectividad de las administraciones*” así como reconoce el

4. JURISPRUDENCIA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En este acápite analizaremos el estado de la cuestión jurisprudencial de los últimos diez años. Para ello estudiaremos un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y tres fallos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre la temática donde podremos vislumbrar los alcances de la normativa bonaerense y las prácticas administrativas respecto al ejercicio de este derecho.

El primer caso que reseñamos es “*Di Pietro, Marcelo Leonidas y otro c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ amparo*”, del 20 de abril de 2006 y resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata. Marcelo Leonidas Di Pietro y Hernán Rodolfo Peter promovieron acción de amparo contra la Municipalidad de Bahía Blanca al no obtener por parte de dicho municipio el listado de beneficiarios de los planes de Jefas y Jefes de Hogar y demás planes de empleo y/o subsidios que administra la comuna. Incluyeron en la solicitud que se consignara en dicho listado los nombres, apellidos, números de documento y domicilio de los beneficiarios⁴⁹. La solicitud, en primer término, no obtuvo resultado y luego de un reclamo la respuesta fue negativa.

En el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, en el voto de la mayoría, señaló que la Ley N° 12.475 [...]:

valor instrumental del acceso a la información en orden a la libertad de expresión y al conocimiento de la cosa pública. Actualmente, el “Portal de Datos Abiertos de la Provincia de Buenos Aires” se encuentra en el sitio <http://datos.gba.gob.ar/>. Por formatos digitales abiertos, el Decreto N° 206/17 establece que son aquellos formatos que mejor faciliten su utilización, procesamiento, y redistribución por parte del solicitante. En cuanto a la utilidad de esta información a través del formato propuesto podemos señalar que permite en principio reutilizarla o interoperarla con sistemas que permitan una sistematización que genere aplicaciones o desarrollos tanto en beneficio del Estado como del Ciudadano, de allí su carácter reutilizable y el valor distinto a información estática o en formatos que no permitan ese tipo de uso y circulación.

49 Cabe señalar que el pedido que efectuaron lo hicieron como ciudadanos y también en carácter de candidatos a concejales por dicha comuna y como contribuyentes de dicho municipio.

[...] viene a consagrar el acceso a la información como derecho individual, en tanto se configura como uno de los ejes de definición del acceso a la información exhibido como correlato de la libertad de expresión. Bajo este punto de vista, el acceso a la información se sitúa en el plano de justificación de los derechos individuales, y más específicamente, en el marco de los llamados derechos de libertad o derechos-autonomía, dirigidos a sustentar el espacio de autonomía personal de los individuos y a permitirles la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión.

Respecto a los actores entendió que no presentaban un interés especial, actual y directo que los habilitara para acceder a dicha información y señaló que la hipótesis de terceros en procura de información relativa a condiciones y datos de otras personas, con apoyo en el derecho a la información del artículo 12 inciso 4 de la Constitución local, amerita la armonía necesaria con el resguardo de la intimidad y privacidad, que es deber del Estado proteger. Expresamente señaló que *“No es la cercanía o proximidad en la relación de vecindad del actor lo que determina el grado de legitimación, sin por el contrario el interés concurrente en relación a la pretensión esgrimida, es decir el modo en que amplía o se limita el círculo vital de derechos de la persona en relación a la información requerida”*.

Por ello, al no especificar en la solicitud cuál es el interés diferenciado que los ampara y en qué medida la indisponibilidad de la información se presenta como un agravio de no susceptible reparación para optar por la vía del amparo, no se dio lugar a dicha acción⁵⁰.

50 Otra fue la mirada vertida en torno a la capacidad de legitimación que presentan los amparistas para el voto de la minoría. Según la Dra. Milanta, el hecho de que los actores sean ciudadanos de Bahía Blanca denota una intensidad en el interés que esgrimen que se diferencia del común de cualquier ciudadano. A dicha circunstancia, se sumaba que la información la solicitaron en su carácter de candidatos a concejales lo cual adicionaba a su condición de vecinos una justificación diferencial en relación a cualquier ciudadano común. La Dra. Milanta planteó una solución intermedia para poder satisfacer los derechos de los amparistas por un lado y de los beneficiarios de los planes por el otro. Así planteó en su voto que la Administración puede proporcionar la información relativa a la selección y adjudicación de los planes sociales a través de datos objetivos y de las constancias obrantes en los registros públicos. Es decir, debió informar aspectos relativos a la distribución y actualización de las subvenciones de los aludidos programas. Con argumentos similares en 2008, en *“Suárez, Alejandro César c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ amparo”*, la mis-

Un cambio de orientación se advierte cuando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falla en los autos “*Asociación por los Derechos Civiles contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley*” de 2014. La Asociación por los Derechos Civiles dedujo acción de amparo a fin de que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires brinde la información oportunamente requerida, relacionada con la cantidad de días de clases no dictadas en determinadas escuelas por ausencia de los docentes. Siguiendo y ampliando los fundamentos del juez de primera instancia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la acción de amparo por no reunir los recaudos exigidos por los arts. 1 y 2 de la entonces ley de amparo vigente, Ley Nº 7.166.

El voto de mayoría⁵¹ funda la condena a la Dirección General de Cultura y Educación para que en el perentorio plazo de 15 días ponga a disposición de la Asociación por los Derechos Civiles la información solicitada, en el amplio espectro normativo que avala el derecho al Acceso a la Información Pública más allá de las limitaciones de la ley local⁵².

Indicando que es un derecho que evoluciona progresivamente, la Corte entiende que el acceso a la información y documentación

ma Cámara por mayoría negó el interés legítimo para acceder a información al titular del medio “Mi ciudad”, quien promovió acción de amparo contra la Municipalidad de Florencio Varela para que dicha comuna le proporcione la nómina completa de empleados permanentes y contratados que allí prestan funciones, con el detalle de nombre y apellido, DNI, antigüedad, actividad desarrollada, área en la que se desempeña y sueldo; en 2013 en los autos “*Asociación por los Derechos Civiles c/ Jefatura de Gabinete de Ministros - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo*” también se rechazó un amparo por información referente a los gastos presupuestados y ejecutados en publicidad oficial para el periodo 2010 y 2011. Como veremos en los fallos de la Corte, interviene la misma Cámara con similares argumentos sin desconocer el antecedente de la Corte nacional, pero añadiendo ahora, como fundamento, que la limitación normativa local respecto al interés legítimo hace inaplicable el criterio amplio de acceso a la información pública.

51 El voto de mayoría es de los jueces Soria, de Lázzari e Hitters y parcialmente Kogan.

52 El voto de la minoría señaló, además de replicar algunos argumentos de la Cámara, que dado que la información peticionada suponía un proceso de relevamiento de datos y no era un documento administrativo existente sino un documento a crearse, no debían computarse los plazos del decreto.

públicas recibe un amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico. En efecto, el voto se funda en el principio republicano de la Constitución y la Constitución provincial [...]

una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder.

Además de citar el Preámbulo y los arts.1, 14, 33 y 38, 41 y 42 de la Constitución Nacional, donde –señalan– la información es peculiarmente necesaria, remiten a los tratados con jerarquía internacional⁵³ y las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la Corrupción además del art. 12 inc. 4° de la Constitución provincial y reconocen que por regla general toda persona ha de tener acceso a la información pública.

Justamente por el carácter progresivo del derecho, más allá del interés legítimo requerido por la Ley provincial N° 12.475, entiendo que la misma estableció un piso mínimo y que por ello, su Decreto reglamentario N° 2.549/04 al no requerir como la ley, interés legítimo, fue más amplio que aquella por lo que desde entonces en el ámbito del Ejecutivo toda persona puede solicitar el acceso a documentos administrativos de naturaleza pública “... *sin necesidad de alegar fundamento o causa ni acreditar derecho o interés alguno*”. Y la doctrina del fallo agrega que [...]

el criterio rector, que mejor armoniza con el máximo rendimiento posible de los derechos y principios constitucionales implicados, es aquél conforme al cual la información generada o controlada por las autoridades estatales se presume pública y la carga de fundar una excepción a esta presunción recae sobre el ente gubernamental.

53 Destacan sólo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13; la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19.1; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 19.2.

Un nuevo caso llega a la Corte provincial en 2016, “*Albaytero, Juan Aníbal contra Municipalidad de Quilmes. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley*” que se resuelve a favor del amparista que había solicitado información pública al municipio de referencia respecto del “Fondo de Inversión para Infraestructura e Intervenciones Urbanas” creado⁵⁴. Si bien los cinco jueces consideraron fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley⁵⁵, el voto al que adhirió la mayoría fue el del juez Daniel Fernando Soria que fue quien fijó las bases del fallo anterior, por lo que sólo destacaremos ahora elementos nuevos respecto del fallo anterior⁵⁶.

El voto de mayoría, siguiendo el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “*CIPPEC c/Min. de Desarrollo Social- dto. 1172/03, Amparo ley 16.986*”, señala que las respuestas vagas o genéricas brindadas por el Municipio no son una contestación adecuada con lo relacionado a la puesta en funcionamiento del fondo, punto neurálgico del requerimiento informativo planteado. También rechaza la afirmación del Municipio respecto a lo imposible o injustificadamente costoso de los trabajos adicionales

54 Específicamente solicitó información sobre 1) monto total de los ingresos percibidos por el municipio en concepto de la contribución especial antes mencionada, discriminado por período; 2) fecha de creación y puesta en funcionamiento del “Fondo de Inversión para Infraestructura e Intervenciones Urbanas”; 3) la incidencia que la Contribución Especial para el Fondo de Inversión para Infraestructura e Intervenciones Urbanas tiene en los ingresos totales del mismo (discriminada por períodos); 4) identificación de la totalidad de los proyectos, obras, contratos, (locaciones, leasing, adquisiciones de bienes, insumos, contratación de personal, gastos fijos y variables, etc.) financiados por dicho fondo y; por último, 5) la individualización de la cuenta bancaria en la que se centraliza la operatoria del Fondo de Inversión para Infraestructura e Intervenciones Urbanas y un resumen completo de los movimientos de la misma.

55 En el caso, el Tribunal Oral Criminal n° 4 del Departamento Judicial Quilmes había declarado abstracta la cuestión sometida a juzgamiento dado que el municipio cumplió con posterioridad a iniciado el amparo cuando brindó información relativa a los montos recaudados correspondiente a los períodos de enero a octubre del año 2011, e indicó que el referido Fondo fue creado por la Ordenanza municipal 11.603/10. A su vez la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó el recurso de apelación al señalar que en el caso no se configura una conducta omisiva arbitraria o ilegítima y que el amparista no exhibe un interés actual y directo que justifique la condena judicial que persigue, además de considerar, respecto del amparo, que el perjuicio alegado no es actual o inminente.

56 Genoud, Kogan y de Lazzari adhirieron al voto de Soria mientras que Pettigiani lo hizo según su voto.

para poder brindar datos por hacerlo sin mayor fundamento ni explicitar los motivos.

Por último, negó que las cuentas bancarias utilizadas para realizar operaciones con fondos públicos constituyan “información sensible”, o que en principio, contengan datos que deban mantenerse en reserva o en secreto.

El tercer caso de la Corte provincial es de marzo de 2017. En los autos “*Longarini, Cristian Ezequiel y otros contra Ministerio de la Producción y otros. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley*”, los actores, por derecho propio como vecinos afectados en su salud, en su propio interés y en el de la colectividad, dedujeron acción de amparo ambiental contra el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción y la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, luego OPDS, aduciendo como fundamento de su demanda, omisiones en el control por parte de la autoridad pública respecto del establecimiento industrial propiedad de la empresa Atanor S.A., solicitando, entre otras peticiones, que la Provincia brinde información ambiental veraz, completa e irrestricta referida a la planta y de toda otra radicada en la zona del conflicto ambiental, exigiéndose la remisión al juzgado de las constancias y antecedentes existentes en los organismos o entidades públicas provinciales, incluida la Autoridad del Agua, referidos a mediciones, análisis y resultados de estudios del aire, suelo, subsuelo y napas freáticas, realizados dentro de la citada planta y en su zona de influencia⁵⁷.

En el caso, los jueces de instancias inferiores respecto a la temática de acceso a la información pública, rechazaron la demanda porque los accionantes no acreditaron haber solicitado oportunamente información ambiental a la entonces Secretaría de Política Ambiental.

En un complejo caso, que demandó que la Corte requiriera varias medidas para mejor proveer y basándose en normativa ambiental (art. 41 de la Constitución nacional; 28 de la Constitución provincial, arts. 2, inc. i) y 16 a 18 de la Ley N° 25.675; art. 3° Ley N°

57 Requirieron también la remisión de las actuaciones relativas a la aplicación de sanciones a la aludida planta industrial, tanto por autoridades provinciales como municipales, y si existiere en trámite un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, copia del expediente respectivo y un informe acerca de su estado.

25.831), si bien reconoció que hay constancias en la causa que evidencian que la autoridad pública demandada brindó en autos información existente en diversas tramitaciones administrativas, también entendió que el mismo es un derecho que no se agota por lo que subsiste el interés de los reclamantes en recibir información actualizada de modo permanente y eficaz.

Así condenó al O.P.D.S. a que cada seis meses efectúe los correspondientes estudios de monitoreo del suelo, subsuelo y napas freáticas y emisiones a la atmósfera, permitiendo el libre acceso a la información a los accionantes y a los habitantes de la zona de influencia, habilitándose su participación durante la ejecución de las acciones llevadas a cabo para cumplir con los parámetros impuestos por la normativa ambiental (arts. 41, C.N.; 28, Const. prov.; 19, 20 y 21, Ley N° 25.675).

CONCLUSIONES

Estamos en un período paradigmático del derecho que deja en evidencia la falta de cohesión e integralidad normativa: se advierte una autentica pluralidad de fuentes vinculantes que conforman distintos estratos de juridificación que no son uniformes ni idénticos (Conf. Corvalán, 2016)⁵⁸. El caso del derecho de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello, un instituto jurídico donde conviven tratados internacionales, normas constitucionales nacionales y locales, leyes restrictivas, reglamentaciones amplias para uno de los poderes del Estado y silencio en los otros, todo ello en un campo de acción administrativo e interpretativo jurisdiccional no ajeno a conflictos.

Este “derecho sobre el derecho” en la terminología de Ferrajoli (2011) es, en nuestro caso, un derecho no sólo de reciente cristalización sino que se encuentra todavía hoy en progresiva evolución. La clave de bóveda de todo este instituto es y debe ser el más amplio

58 Siguiendo al autor, la estratificación de la juridicidad presenta múltiples y diversas capas de procedencia, jerarquía e intensidad y se integran por componentes “infra” y “supra” estatales. La *“estratificación de la juridicidad se perfecciona por la presencia de normas jurídicas condicionantes y a su vez condicionadas, en casi todas las capas y a partir de una multiplicidad y diversidad de fuentes. Entonces ya no se resuelve el tema en la ecuación “Constitución- ley- reglamento”* (Corvalán, 2015:62).

derecho posible para el acceso ciudadano a la información pública pues es el único compatible con el sistema democrático y de los derechos humanos.

En efecto, desde el punto de vista jurídico-constitucional y dado que la corrupción fue definida por nuestro constituyente como un atentado contra el sistema democrático, el acceso a la información pública es necesario para el ejercicio de un control real y racional de la cosa pública⁵⁹ y para un ejercicio legítimo del gobierno. El titular del bien jurídico vinculado al desempeño ético de la función pública es la ciudadanía toda pues es un derecho que afecta al sistema democrático⁶⁰. Y si bien es cierto que la opacidad no supone *per se* la corrupción, aquélla es su precondition.

Por otro lado, el acceso a la información pública es claramente uno de los ejes del ejercicio de la libertad y en ese marco se ha consolidando como derecho humano a partir de la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base del clásico derecho de Libertad de Pensamiento y de Expresión reconocido como artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Hemos señalado que el derecho de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de estratificación de la juridicidad y podemos dar cuenta de ello: por un lado, reconocido genéricamente el derecho constitucional de acceso a la información, a nivel legislativo se cuenta con una norma, la Ley N° 12.475, que permite el acceso sólo a los documentos administrativos y a quien acredite un interés legítimo; sin embargo, la norma que la reglamenta cuatro años más tarde, Decreto N° 2549/04, omite la acreditación del interés legítimo⁶¹, requisito que tanto la Administra-

59 La transparencia previene las opiniones públicas irreflexivas, la opacidad las promueve.

60 Sin dudas estamos frente a un nuevo derecho de incidencia colectiva que se halla en cabeza de los ciudadanos y en tal sentido les cabe la legitimación prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En igual sentido Gelli (2016) señala que dada la amplia legitimación que la Corte de la Nación le da a este derecho, estamos frente a una acción popular.

61 Otro claro ejemplo de los conceptos “fragmentación de la legalidad”, “extensión del principio de legalidad”, o “inflación de las leyes”, conceptos que reseñan este nuevo esquema normativo no-piramidal donde las normas legislativas, por ambigüedad, insuficiencia o delegación son a su vez reguladas, limitadas, aclaradas o

ción Pública como diversos tribunales han seguido exigiendo hasta que la Suprema Corte de Justicia en 2014, recurriendo a principios, normas y fallos internacionales y nacionales reconoce un derecho amplio de acceso a la información pública. De todas formas, esta limitación aún sigue estando vigente no sólo en las normas sino también en las prácticas administrativas por lo que se requiere una urgente modificación.

No obstante la relación de subordinación jurídica típica de nuestro régimen constitucional al bloque federal y la crítica a las diferencias normativas habidas, creemos que debe optarse por una política legislativa provinciana genuina como expresión de la autonomía política y administrativa, con las implicancias orgánicas y estructurales que requiere un régimen que responda a la estratificación organizacional provincial⁶².

Ya han pasado más de 17 años desde la sanción de la Ley N° 12.475 y han habido varios proyectos de ley sobre el derecho de acceso a la información pública, lo que da cuenta de la necesidad de la modificación del actual marco normativo⁶³. En esa necesaria actualización, las referencias a los derechos humanos y al sistema democrático no pueden faltar, tal como ya fuera recocado por la jurisprudencia internacional, la Corte Suprema de Justicia y la ley nacional.

Además de los principios de publicidad, celeridad, informalidad, accesibilidad, igualdad y gratuidad ya vigentes en el decreto local, y los de legitimidad activa amplia, transparencia activa, presunción de publicidad de toda la información en poder del Estado, máximo acceso, accesibilidad en formatos electrónicos abiertos, no discriminación, responsabilidad, facilitación, buena fe, *in dubio pro petitor*, disociación, control y alcance limitado de las excepciones,

completadas por otras normas aún de menor jerarquía.

62 El art. 36 de la Ley N° 27.275 invita a la adhesión de las provincias, producto de una técnica legislativa que se ha vuelto habitual en los últimos años. Sin embargo, el mimetismo normativo no asegura la necesaria coherencia cuando las estructuras institucionales son distintas.

63 En Diputados, los proyectos D- 1949/10-11- 0, D- 964/11-12- 0 y D- 1992/11-12- 0. En el Senado, E 509 2016 - 2017, E 446 2016 - 2017, E 61 2016 - 2017, E 23 2016 - 2017, E 165 2014 - 2015, E 96 2013 - 2014, E 274 2012 - 2013, E 103 2012 - 2013, E 7 2012 - 2013, E 444 2010 - 2011, E 8 2009 - 2010, E 221 2008 - 2009, E 40 2005 - 2006, E 35 2004 - 2005, E 54 2003 - 2004, E 16 2001 - 2002.

principios presentes en el ámbito nacional que debería replicar la futura legislación provincial, pueden proyectarse algunas otras, habida cuenta de la experiencia tales como la prohibición expresa de delegación o reglamentación del derecho por los órganos estatales⁶⁴, el profesionalismo en las respuestas para garantizar su eficiencia y eficacia; la verificabilidad, para permitir el acceso a las fuentes de la información y controlar su completitud y/o inexistencia alegada, la sencillez del lenguaje o procesamiento de los datos, para que no se requieran ulteriores procesamientos o “traducciones”.

El acceso, dado el creciente uso de las plataformas electrónicas para los diversos trámites administrativos, también requerirá la generación de usuarios y claves a los ciudadanos para poder no sólo “seguir” sus propios trámites sino cualquier otro.

Por último, antes que la creación de nuevos órganos especializados o Consejos pluripartitos, que terminan bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, proponemos reforzar las competencias del defensor del pueblo, dado el carácter de derecho colectivo del que estamos tratando, sus competencias constitucionales asignadas y la plena autonomía funcional y política que debe tener (conf. art. 55 de la Constitución de la Provincia).

Ante este panorama, el normativo no es el único aspecto sobre la cual resulta necesario innovar: de nada sirve crear un régimen o adherir a otro sin una visión garantista que en la práctica se plasme en la necesaria colaboración orgánica inter-poderes e inter-administrativa para acceder a la información pública. Sin la promoción de una cultura de apertura y transparencia, y habida cuenta de la atomización organizacional del Estado, estaremos sólo promoviendo un acceso condicionado a la judicialización del derecho o a un triste peregrinar del ciudadano entre distintos organismos.

64 En este sentido, la ley debe ser completa, amplia y autosustentable. El principio de base mínima de la ley no es suficiente pues generalmente las reglamentaciones suelen ser más restrictivas que la norma general.

REFERÊNCIAS

- Basterra M. (2017). Acceso a la Información Pública y transparencia. Ley 27.275 y decreto reglamentario 206/17. Comentados, anotados y concordados. Buenos Aires: Astrea.
- Berardi, C. J. (2018). “El acceso a la información pública. Alcances limitados de un derecho fundamental” en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública N° 470, págs. 109-114.
- Buteler, A. (2012). “Corrupción y derecho administrativo” en Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 12 - n. 48 | abril/junho - 2012 Belo Horizonte, p. 1-256. Disponible en www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/download/181/231
- Carello, L., (1998). “La Convención Interamericana contra la Corrupción y el ‘derecho a la no corrupción’”, en AAVV DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 50 años de Derechos Humanos, Santa Fe, 1998, cit. por Gordillo, A., (2009) “Hacia la unidad del orden jurídico mundial”, en AAVV El Nuevo derecho administrativo global en América Latina, Buenos Aires: RAP, pág. 265.
- Corvalán, J. G. (2015). Discrecionalidad administrativa y tributaria. Tesis doctoral, USAL. Disponible en http://www.ninc.com.br/img/pesquisa/arquivo_20150819190539_49.pdf
- Corvalán, J. G. (2016). Derecho Administrativo en transición. Reconfiguración de la relación entre la administración, las normas y el Poder Judicial. Reglas y principios. Discrecionalidad débil y fuerte. Valoración, interpretación y ponderación. Control judicial y políticas públicas. Buenos Aires: Astrea.
- Díaz Cafferata, S. (2009). “El derecho de acceso a la información pública” en Lecciones y Ensayos, nro. 86, 2009, p. 151-185.
- Ekmekdjian, M. A., (1994). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I, Buenos Aires: Depalma.

O direito à inclusão do gênero feminino nas STEM e a gamificação como ferramenta educacional: o caso da plataforma *NINACODE*

Mariana Noely Chacon Vianna

Thaisi Leal Mesquita de Lima

Patrícia Borba Vilar Guimarães

INTRODUÇÃO

A histórica luta feminina para superar barreiras impostas culturalmente, em busca de alcançar a isonomia entre gêneros, ganhou ainda mais destaque nas últimas décadas. Em decorrência do avanço dos estudos no campo da tecnologia, essa discussão se tornou mais presente, principalmente, no âmbito científico e tecnológico.

Nesse contexto, é de extrema importância analisar com clareza e de forma reflexiva o papel atualmente ocupado pelo gênero feminino nas ciências, tecnologias, engenharias e matemática (STEM).

Hodiernamente, de modo intuitivo, existe a percepção de que o número de mulheres que adentram nas ciências tecnológicas ainda é pequeno, o que desperta na academia a necessidade urgente de estudos que se debruçam em constatar a procedência ou não desse sentimento, compreender e concluir por uma alternativa para essa questão.

Ao confrontar a história da evolução dessas áreas, tem-se que foram muitas as mulheres que participaram de forma ativa do desenvolver de diversos estudos e invenções impactantes para o progresso humano. Entretanto, quase sempre elas tiveram os seus protagonismos ofuscados arbitrariamente pela sociedade masculina predominante na época, deixando-as sempre em terceiro plano, no que dizia respeito à propriedade de patentes, bem como ao reconhecimento e sucesso de suas criações no decurso do tempo.

Nesse viés, faz-se imprescindível pesquisar técnicas que aproximem o gênero feminino das STEM. Pensando nisso, surge a ideia de explorar o uso da gamificação como um valioso recurso didático-tecnológico para a inclusão feminina nessas áreas, possibilitando

que garotas tenham contato mais amplo e vertical com a programação e as tecnologias. Oportunizar o maior contato feminino com as STEM contribui para desmistificar a falácia de que o gênero masculino é o único apto para explorar esses campos de estudo, bem como que é o que possui maior compatibilidade com as “ciências duras” e que é o mais capaz de desenvolver a ciência e a tecnologia.

Adentrando na problemática jurídica, é fundamental colocar que a previsão constitucional de tratamento isonômico entre homens e mulheres precisar vigorar e isso só será possível se, no início do desenvolver humano, por meio da educação, as mulheres tiverem direito e oportunidade de escolha iguais aos homens.

O que se coloca neste estudo não é somente o fato de que todos precisam ser tratados de forma igual, mas que políticas públicas precisam ser pensadas para quebrar a dicotomia entre homens e mulheres, feminino e masculino, isto porque o indivíduo precisa ser livre, ou seja, precisa se libertar dos rótulos que os direcionam a caminhos escolhidos pelo coletivo, não pelo indivíduo. Como se não bastasse, esta pesquisa esbarra em outra problemática jurídica, qual seja, as previsões constitucionais de promoção do desenvolvimento regional, econômico, social e tecnológico. Isto porque, limitar o poder de escolha do público feminino significa desestimular que mais de cinquenta por cento da população brasileira se debruce em produzir tecnologia e, conseqüentemente, desenvolver o país.

No que tange o exposto, é de máxima relevância que o gênero feminino, e todas as pessoas que se identificam com ele, compreendam que, para o desenvolvimento de uma sociedade justa, igualitária e inteligente, as escolhas profissionais sobre as diversas áreas do conhecimento devem ser feitas de forma consciente, democratizando o acesso da mulher aos mais diversos postos de trabalho, bem como produzindo ciência e sendo reconhecidas por seus méritos.

Desse modo, o objetivo geral do presente estudo é analisar o percentual de mulheres – e pessoas que se identificam com o gênero feminino – que ingressam nas ciências duras, estudar se existe fomento ao ingresso dessas pessoas nas supracitadas áreas, quais as políticas públicas existentes nesse sentido e quais os direitos constitucionais afetados por esse tema. A partir disso, será possível constatar o impacto gerado por esses dados na sociedade atual e futura.

Consonante a isso, no que diz respeito ao objetivo específico, pretende-se investigar o conceito de gamificação, por meio do qual almeja-se averiguar como ela pode contribuir para a inserção feminina nas tecnociências, com ênfase no campo da tecnologia da informação. Por último, esta pesquisa se debruçará sobre o caso do projeto NinAcode, uma plataforma que consiste em uma iniciativa, por meio da gamificação, que visa aumentar e otimizar a presença feminina nos espaços do ensino superior tecnológico.

Para alcançar tais objetivos, este trabalho utilizará de vasta revisão bibliográfica e análise de diversos dados. A metodologia utilizada será descritiva e exploratória. Nesse ínterim, descreve de forma minuciosa o contexto em que estão inseridos os objetivos e explicita conceitos acerca do recorte temático através de extensa pesquisa e dados estatísticos.

Em suma, tem-se a pretensão de contribuir para a evolução de pesquisas no que tange à participação feminina nas ciências e tecnologias, estimular uma reflexão crítica acerca do papel exercido pela mulher nas STEM, analisar quais os caminhos para a concretização dos preceitos constitucionais ora mencionados e verificar qual é a contribuição da gamificação para a inclusão de mulheres nas STEM, que é o escopo do projeto NinAcode, o qual será explorado por meio do estudo de caso.

O ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO, O GÊNERO FEMININO E O DIREITO À INCLUSÃO

No mundo globalizado a tecnologia e ciência tem caráter primordial para uma vida digna. Assim, permitir que uma parcela significativa da população seja distanciada e desencorajada a seguir nas carreiras na tecnociência, por existir uma crença difundida no contexto social e firmada por concepções históricas infundadas, representa ir de encontro a normas fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro e segregar de forma velada as cidadãs do país.

Nos primórdios da ciência, por volta do século XVII e XVIII, as características tidas como femininas — habilidade manual, destreza,

imaginação e inteligência —¹ eram valorizadas no ambiente científico. Entretanto, ao longo do tempo, a produção de ciência passou a ser reconhecida como exclusiva do universo masculino, excluindo as mulheres, por uma suposta falta de afinidade e aptidão do gênero.

No que tange o conhecimento científico proporcionado e os métodos ensinados pelas universidades, o gênero feminino foi excluído até meados do século XIX, e árduas foram as tentativas de algumas personalidades para argumentar em defesa de uma maior democratização desses institutos para o gênero em questão.

Exemplos expoentes foram as diversas enciclopédias que contavam a história das mulheres na ciência por volta do século XIV até o XIX, tais documentos reuniam inúmeras realizações de figuras femininas com o escopo de provar a capacidade de admissão das mulheres nas universidades. Um desses livros agrupava as diversas contribuições das mulheres em todos os campos da ciência natural e foi escrito por Cristian Friedrich Ladies².

Convergindo com isso, faz-se imprescindível destacar que as bases da informática, por exemplo, foram firmadas por inúmeras mulheres que, durante a década de 1950, se dedicaram ao estudo e a criação de máquinas que poderiam operar com cálculos, os quais eram entendidos como longos e repetitivos pelos cientistas³. Aqui fica evidente o pioneirismo feminino não apenas na produção tecnológica, mas no empreendedorismo, haja vista que desde sempre elas lutaram para resolver dores que a sociedade apresentava, exemplo disso foi a supramencionada busca por um mecanismo que facilitasse a realização de cálculos longos e complexos.

Nesse contexto, entre os nomes que se destacam, encontra-se a trajetória de Ada Lovelace, considerada a primeira mulher programadora da história, pois foi capaz de ampliar as funções do Engenho Analítico, máquina que se equipara aos computadores atuais, estes

1 SCHWARTZ, Juliana; CASAGRANDE, Lindamir Salete; LESZCZYNSKI, Sonia Ana Charchut; CARVALHO, Marília Gomes de. **Mulheres na informática: quais foram as pioneiras?**. *Cad. Pagu* [online]. 2006, n.27, pp.255-278. ISSN 0104-8333.

2 SCHIEBINGER, L. **O feminismo mudou a ciência?** Tradução de Raul Fiker. Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 55 e 56.

3 SCHWARTZ, Juliana; CASAGRANDE, Lindamir Salete; LESZCZYNSKI, Sonia Ana Charchut; CARVALHO, Marília Gomes de. **Mulheres na informática: quais foram as pioneiras?**. *Cad. Pagu* [online]. 2006, n.27, pp.255-278. ISSN 0104-8333.

idealizados pelo matemático Charles Babbage⁴. Lovelace, em suas anotações que foram publicadas, utilizou os números de Bernoulli como exemplos e, além disso, conceitos e estruturas que se identificam com as disposições utilizadas hodiernamente na programação. Exemplo do reconhecimento de sua grandiosidade foi a homenagem realizada pelo Departamento de Defesa Norte-Americano, que nomeou como ADA uma linguagem de programação.

É fundamental colocar que inúmeras outras mulheres também foram indispensáveis para a história da ciência e, especificamente, da computação, porém, algumas tiveram seus nomes retirados dos projetos desenvolvidos e aos poucos foram afastadas dessa área do conhecimento, pois a ideia predominante era a de que o gênero masculino era o produtor do conhecimento e da tecnologia, enquanto a mulher deveria comportar-se como receptora da erudição produzida por estes⁵.

Avaliando a mais alta honraria das carreiras científicas é possível identificar um abismo entre os gêneros. Utilizando como recorte o Prêmio Nobel, desde 1901, cerca de 95% dos condecorados em ciências são homens. Já o número de mulheres laureadas – em todas as áreas – é cerca de cinquenta, em um universo com mais de quinhentos e noventa prêmios⁶.

Desse modo, é imprescindível refletir sobre quais os impactos dessa exclusão feminina na ciência e como isso se reflete até os dias de hoje. Assim, é oportuno analisar o aumento exponencial no percentual de mulheres matriculadas no ensino superior, mundialmente falando. Atualmente, o número de mulheres nos cursos de graduação é cerca de sete vezes maior do que era na década de setenta, enquanto o número de homens aumentou quatro vezes, em relação a

4 SCHWARTZ, Juliana; CASAGRANDE, Lindamir Salete; LESZCZYNSKI, Sonia Ana Charchut; CARVALHO, Marília Gomes de. **Mulheres na informática: quais foram as pioneiras?**. *Cad. Pagu* [online]. 2006, n.27, pp.255-278. ISSN 0104-8333.

5 LIMA, Fabiane Alves de. **Mulheres na tecnociência**: Depoimentos e vivências de mulheres nos cursos de computação da universidade tecnológica federal do Paraná. 2014. 136 f. Tese (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

6 NOBEL. **52 Prêmios Nobel para Mulheres**. Disponível em: <<https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

já mencionada década⁷. No Brasil, conforme dados do Censo da Educação Superior, o número de mulheres em graduação tanto presenciais quanto na Educação a Distância (EAD) é superior ao número de homens⁸.

Apesar disso, dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) não são animadores, especificamente no que tangencia o campo tecnológico. As estatísticas revelam que, no Brasil, apenas 15% das matrículas nos cursos de tecnologia são realizadas por mulheres⁹. A partir dos dados revelados, pode-se concluir que hoje, no país, nem metade dos ingressos nos cursos de tecnologia são representados por mulheres, o que é inversamente proporcional às estatísticas que apontam que, atualmente, a população brasileira é composta em 51,6% por mulheres¹⁰. Isso significa que, mesmo sendo maioria, o gênero feminino continua à margem do âmbito tecnológico.

No que diz respeito a legislação brasileira, a Constituição Federal é nítida em seu artigo 5º, I, quando afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações¹¹. Somado a isso, em seu artigo 23, V, consta a previsão de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação¹².

Nessa perspectiva, o que está apregoado na lei maior é a notória vontade do constituinte originário de erradicar qualquer tipo de distorção histórica ainda remanescente, quanto ao gozo dos direitos fundamentais entre os gêneros feminino e masculino, notadamente, no âmbito científico. Contudo, tal previsão não foi suficiente. Isto

7 **RELATÓRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO MUNDIAL: igualdade de gênero e desenvolvimento**. Washington DC: Banco Mundial, 2012.

8 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Censo da Educação Superior: Notas Estatísticas 2017**. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2019.

9 *Idem ibidem*.

10 **IBGE. Quantidade de homens e mulheres**. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>>. Acesso em: 02 fev. 2019.

11 **BRASIL. Constituição Federal de 1988. Institui a Carta Magna**.

12 *Idem ibidem*.

porque ainda são raras as políticas públicas voltadas à concretização desse direito.

É fundado nesse anseio constitucional, de promoção dos meios de acesso ao mundo científico pelo gênero feminino, como obrigação partilhada entre todos os entes da federação, que o baixo índice de mulheres na área tecno-científica deve resultar numa constante busca pela investigação das causas e os caminhos que podem transformar essa realidade ultrajante.

Outros dados que carecem de atenção foram divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), os quais revelam o enorme desequilíbrio entre os gêneros no contexto tecnológico. Apesar de as mulheres representarem uma maioria na população geral, dados de caráter mundial evidenciam que o número de mulheres que optam por disciplinas STEM é muito inferior ao percentual de homens¹³.

Na educação superior, estudos também divulgados pela UNESCO, apontam que o percentual de mulheres nas carreiras de STEM correspondem a apenas 30% do total de matrículas, ou seja, os homens representam a ampla maioria dos estudantes nesta área do conhecimento. Especialmente nas Tecnologias da Informação e Comunicação esses dados são ainda mais alarmantes pois elas representam menos de 5% das matrículas¹⁴.

Em consonância com essas estatísticas e estudos¹⁵, o déficit de reconhecimento das enormes contribuições das mulheres, no decorrer da história das ciências da computação e da tecnologia em geral, tende a perenizar a ideia de que mulheres não têm afeição, afinidade ou que não possuem habilidade suficiente para laborar em tal âmbito.

Assim, é perceptível a ideia de superioridade masculina para as ciências exatas, mesmo sem nenhum estudo comprovando tal tese e

13 UNESCO BRASIL. **Decifrar o Código**: educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília, 2018. 84 p. p. 19.

14 *Idem ibidem*.

15 LIMA, Fabiane Alves de. **Mulheres na tecnociência**: Depoimentos e vivências de mulheres nos cursos de computação da universidade tecnológica federal do Paraná. 2014. 136 f. Tese (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

mesmo sabendo que todo ser humano possui a capacidade de se desenvolver em qualquer área, independente de gênero. Tal percepção foi constatada, inclusive, por meio de uma pesquisa que foi realizada com garotas, em uma escola de ensino médio da rede pública, quando algumas colocaram que os meninos têm facilidade de compreender melhor as matérias de cálculos e que matérias que envolvem números são mais difíceis para as meninas¹⁶.

Somado a isso, outros estudos apontam dois tipos de segregação que se apresentam de forma mascarada para o público feminino. A primeira foi intitulada de segregação horizontal, pois, por meio, principalmente, da atuação da família e da escola as garotas são impulsionadas a escolher profissões diferentes das masculinas e a se avaliarem como mais propícias para a realização de determinadas atividades e profissões, as quais são consideradas mais compatíveis com o gênero. A segunda foi nomeada como segregação vertical, a qual sutilmente favorece a estagnação das mulheres em posições subordinadas ao gênero masculino e ainda propulSIONA melhores carreiras para eles, assim, quanto mais alta a posição, maiores os salários e as discrepâncias e, conseqüentemente, mais reduzido o percentual de mulheres¹⁷.

Seguindo esse raciocínio, o mesmo cenário é percebido quando, para as cientistas conseguirem cargos de destaque, benefícios e bolsas de pesquisa é necessário maior esforço e qualificação, se comparado ao gênero oposto.

Observa-se, portanto, que por não haver identificação com lógica social e com os estereótipos voltados para um determinado grupo que exerce uma relativa função¹⁸, algumas mulheres tendem a perder o sentimento de pertencimento, o que culmina na opção por profissões que não são culturalmente dominadas por homens, em busca

16 QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de; MOREIRA, Josilene Alves. Gênero e inclusão de jovens mulheres nas ciências exatas, nas engenharias e na computação. In: REDOR, 18., 2014, Recife. **Anais**. Recife: -, 2014. p. 3483 - 3500.

17 OLINTO, G. A inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. **Inclusão Social**, Brasília, v. 5, n. 1, p. 68-77, jul./dez. 2011.

18 LIMA, Fabiane Alves de. **Mulheres na tecnociência**: Depoimentos e vivências de mulheres nos cursos de computação da universidade tecnológica federal do Paraná. 2014. 136 f. Tese (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

de que seja sanada a sensação de constante avaliação, opressão e injustiça, pelo julgamento e prestígio incessante dos demais, ainda que não sejam os mais qualificados.

Outros dados que demandam atenção foram os divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), os quais revelam o enorme desequilíbrio entre os gêneros no contexto tecnológico. Apesar de as mulheres representarem uma maioria na população geral, elas correspondem a, por volta de, apenas 30% dos graduados nas carreiras STEM¹⁹.

Em decorrência dos fatos mencionados, urge citar que entre os 17 objetivos para transformar o mundo, elencados pela ONU, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com Promessa de um Mundo Igualitário, está a luta pelo empoderamento de meninas e mulheres como um passo fundamental e de significativa importância para o desenvolvimento sustentável²⁰. Nas metas há a reafirmação da ideia de que se torna impossível alcançar o ápice do desenvolvimento humano se para metade da humanidade for negado plenos direitos e oportunidades nos diferentes contextos sociais e educacionais.

Assim, é fato notório a complexa tarefa de estudar conceitos de gênero atrelados a ciência e tecnologia. Entretanto, diante do que já foi mencionado, no que se refere ao corpo social contemporâneo, no qual inúmeras são as mutações advindas do avanço da ciência e tecnologia, é clarividente que a busca por igualdade de gênero nesse campo trará consequências positivas, resultando em um ambiente educacional capaz de erradicar as relações sociais preconceituosas, hierárquicas e discriminatórias²¹.

É bem verdade que a contemporaneidade, apesar das diversas evoluções, ainda não superou a discriminação e alguns estereótipos, no que tange o gênero feminino, inclusive e de forma expressiva no

19 UNESCO BRASIL. **Decifrar o Código:** educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília, 2018. 84 p.

20 ONU (Org.). Agenda 2030. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>>. Acesso em: 20 jan. 2019.

21 CASCAES, Tânia Rosa F.; SOUZA, Tatiana de; CARVALHO, Marília Gomes de. Gênero, diversidade sexual, ciência e tecnologia: a escola como agente de mudanças. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, n. 1718, p.28-41, 05 jan. 2009. Semestre.

que diz respeito ao campo tecnológico. Contudo, as mulheres lutam diariamente para superar essas barreiras e têm mostrado a cada nova conquista a capacidade em lidar com a tecnologia²², indo deveras além do uso de eletrodomésticos, que na concepção retrógrada de alguns, são os únicos aparelhos tecnológicos com os quais elas são capazes de lidar.

É notório que o cenário hodierno é excessivamente desestimulante para as jovens em geral e desafiador para aquelas que pretendem adentrar nesse campo de estudo, o qual é imprescindível para o desenvolvimento da sociedade. Somado a isso, é impensável que apenas homens construam melhorias para a sociedade, enquanto as mulheres compõem a maioria da população, tendo em vista que elas representam cerca de 52% da população total, conforme dados da PNAD, publicada em 2017²³.

Por fim, fica evidente que é urgente e importante que cada vez mais as mulheres possam acessar esta ampla área do conhecimento e que sejam estimuladas a pensar em melhorias para suas semelhantes, sabendo das reais necessidades do gênero, para que possam assim contribuir ativamente para a história presente e futura, bem como para a promoção do desenvolvimento regional e para a promoção e desenvolvimento da pesquisa e tecnologia, todos esses preceitos explorados na carta magna.

A GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL

Devido ao histórico, o atual contexto de desigualdade e de segregação camuflada do gênero feminino, no que tange o âmbito tecnológico, é imprescindível e basilar que desmedidos sejam os esforços na busca e aplicação de providências para a transfiguração deste cenário inquietante.

Cabe salientar que, apesar do longo processo de transformação que resultou no ingresso de mulheres na ciência, não se pode esmorecer no que tange às políticas que ensejam uma maior inserção

22 *Idem Ibidem*.

23 IBGE. **Quantidade de homens e mulheres**. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>>. Acesso em: 20 fev. 2019.

de mulheres e que buscam compreender a dinâmica de gênero na ciência²⁴.

Nesse viés, é plausível mencionar a preocupação da diretora executiva da Organização das Nações Unidas (ONU Mulheres) Phumzile Mlambo-Ngcuka²⁵, a qual em 2017, já afirmava a necessidade de que ocorresse uma transformação significativa na educação de jovens mulheres para que elas tenham oportunidades de competir de forma que existam possibilidades reais de obter êxito nas demandas de “novos empregos”, com boas remunerações na sociedade contemporânea. Ainda complementa dizendo que não se deve esperar, sem fornecer as devidas ferramentas, que as mulheres logrem êxito em um ambiente que historicamente as excluiu.²⁶

No presente, em um contexto social androcêntrico²⁷, que representa a supervalorização do masculino, apesar de a sociedade não apresentar restrições formais para a entrada de garotas no ambiente tecno-científico, são diversos os entraves que limitam e dificultam a produção deste tipo de conhecimento, hierárquico e territorialmente²⁸.

Assim, urge que medidas sejam tomadas para que cada vez mais mulheres possam se identificar com uma das carreiras da STEM e para que não desacreditem de suas capacidades intelectuais por puro preconceito, sem nenhuma comprovação científica. Aqui cabe destacar que, mesmo não sendo o caso, mas se o tema versasse sobre

24 SCHIEBINGER, L. **O feminismo mudou a ciência?** Tradução de Raul Fiker. Bauru, SP: EDUSC, 2001. p.39

25 ONU. **As mulheres e as mudanças no mundo do trabalho:** por um planeta 50-50, artigo da diretora executiva da ONU Mulheres. 2017. Disponível em: <<http://www.onumulheres.org.br/noticias/as-mulheres-e-as-mudancas-no-mundo-trabalho-por-um-planeta-50-50-artigo-da-diretora-executiva-da-onu-mulheres/>>. Acesso em: 10 jan. 2019.

26 SCHIEBINGER, L. **O feminismo mudou a ciência?** Tradução de Raul Fiker. Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 39

27 Termo criado pelo sociólogo norte-americano Lester F. Ward, em 1903. Esta expressão está diretamente relacionada a noção de patriarcado, mas não diz respeito apenas ao privilégio dos homens, mas também à forma com a qual as experiências masculinas são colocadas como as experiências de todos os seres humanos e tidas como uma norma universal, única, tanto para homens quanto para mulheres, ignorando a existência de outro gênero e a sabedoria e experiência feminina.

28 CABRAL, Carla Giovana. As mulheres nas escolas de engenharia brasileiras: História, educação e futuro. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, v. 1, n. 4, p.9-19, 2005. (pag. 2)

determinado público com a capacidade reduzida, ainda assim tal exclusão deveria ser repudiada. Isto porque o mundo vive a era do conhecimento e da transfronteiricidade, não havendo impedimentos, nem limites, para ninguém que esteja disposto a aprender.

Com políticas públicas pensadas para todos, qualquer área acadêmica ou profissional deve se preparar para receber qualquer pessoa, concretizando assim o que há tempos prega Boaventura de Sousa Santos, quando afirma que todo mundo tem o direito a ser igual quando as diferenças os inferiorizam; e tem o direito a ser diferente quando a igualdade os descaracteriza. A partir disso, emerge a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades²⁹.

Tendo em vista que, incluída em uma ótica interdisciplinar, a tecnologia passa a ser o alicerce da cultura material pós-moderna e um requisito fulcral para a máxima expansão social e econômica de um país³⁰, torna-se oportuno que a conectividade seja enxergada como um catalisador de transformações nas instituições locais e nos sistemas socioeconômicos, o que tende a mudar as relações de poder vigentes³¹.

Nesse diapasão, as tecnologias atuam para o gênero feminino como utensílios para acesso a dados e conhecimentos, e inclusive como ferramenta capaz de difundir informações para outras mulheres em um mundo permeado por desigualdades entre os gêneros e onde a informação e o conhecimento são vantagens corporativas. Assim, torna-se ainda mais preponderante e determinante a inclusão

29 SANTOS, B. de S. **Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade, p.56.

30 CASCAES, Tânia Rosa F.; SOUZA, Tatiana de; CARVALHO, Marília Gomes de. Gênero, diversidade sexual, ciência e tecnologia: a escola como agente de mudanças. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, n. 1718, p.28-41, 05 jan. 2009. Semestre.

31 GURUMURTHY, Anita. **Igualdade de gênero através do acesso as TICs e da sua apropriação**: uma abordagem com base nos direitos. Disponível em: <<https://politics.org.br/edicoes/igualdade-de-g%C3%AAnero-atrav%C3%A9s-do-acesso-%C3%A0s-tics-e-da-sua-apropria%C3%A7%C3%A3o-uma-abordagem-com-base>>. Acesso em: 15 jan. 2019.

tecnológica para as mulheres conquistarem a tão almejada cidadania plena³².

Outro aspecto relevante a ser destacado tangencia o mercado de trabalho. A maior inserção de mulheres na área, gera uma maior pluralidade para a equipe profissional e uma permuta de ideias e discussões que resultam em novas possibilidades para resolver problemas. Além disso, torna os postos de trabalho, tradicionalmente masculinos, mais atraentes para outras mulheres³³.

A respeito do labor, o artigo 7º, XX, da Constituição Federal, disserta sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, visando a proteção do mercado de trabalho da mulher, o que deve ser efetivado mediante incentivos específicos³⁴.

Alguns exemplos de investimentos neste âmbito são ações afirmativas, uma legislação favorável e incentivos financeiros do governo ou particulares. Outro, diz respeito a mídia, que pode contribuir comprometendo-se em promover uma maior representação de mulheres nas carreiras científicas, o que propicia uma desconstrução dos estereótipos machistas imperantes. Medida também extremamente relevante é a parceria entre instituições de ensino e empresas, visando direcionar garotas para o mercado de trabalho³⁵.

Similarmente, outro exemplo básico e crucial é que sejam feitos maiores investimentos na educação continuada dos docentes, tanto do ensino médio quanto do fundamental, que lecionam as disciplinas de STEM. Essa necessidade é evidenciada por um estudo que chega a conclusão de que os professores têm uma influência específica no interesse e comprometimento das meninas nessa esfera do conhecimento, pois exercem o papel de serem os pioneiros no despertar da curiosidade e entusiasmo das alunas em ciências, tendo em

32 MACIEL, Ariana Dorce. O lugar das mulheres: Gênero e inclusão digital. **P2p e Inovação**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p.67-85, set. 2015. Semestral.

33 CASCAES, Tânia Rosa F.; SOUZA, Tatiana de; CARVALHO, Marília Gomes de. Gênero, diversidade sexual, ciência e tecnologia: a escola como agente de mudanças. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, n. 1718, p.28-41, 05 jan. 2009. Semestre.

34 BRASIL. Constituição Federal de 1988. **Institui a Carta Magna**.

35 UNESCO BRASIL. **Decifrar o Código: educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)**. Brasília, 2018. 84 p. p, 70.

vista que essa atribuição não foi encontrada na família ou na comunidade em geral³⁶.

Consoante aos fatos aludidos, compete ponderar sobre a gamificação como um mecanismo útil no que tange a educação e um maior contato de jovens mulheres com a tecnologia e a programação, tendo em vista a tendência do atual corpo social em interessar-se por jogos. Este fato deve guiar a criação de novos produtos e sistemas³⁷ e não pode ser diferente na educação, portanto, deve ser considerado.

O termo gamificação advém do inglês, *gamification*, e significa a incorporação da mecânica, estética, dinâmica dos games e uma ampliação de toda lógica que os envolve em ambientes diversos³⁸ e pode ou não ser mediada por recursos tecnológicos, tendo em vista que os princípios dos games pode ser utilizado sem a necessidade de um dispositivo tecnológico.

Essa aplicação é utilizada nas mais diferentes áreas, uma delas é a pedagógica, a qual já possui diversos estudos que investigam e comprovam sua capacidade significativa em despertar o interesse e melhorar o aprendizado dos alunos³⁹.

Nesse aspecto, a Rede Internacional Virtual de Educação, que é um Programa de Educação a Distância do Ministério da Educação, reitera que uma ferramenta de aprendizagem é um recurso digital que sirva como amparo para a aprendizagem, dessa forma, esses recursos podem ser diversas atividades multimídias, jogos e animações⁴⁰.

36 *Idem Ibidem*. p. 50

37 ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera Cruz. Gamificação: Diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina (Org.). **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. p. 74-97.p.12

38 FIGUEIREDO, Mercia; PAZ, Tatiana; JUQUEIRA, Eduardo. Gamificação e educação: um estado da arte das pesquisas realizadas no Brasil. In: 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO., 2015, Maceió- Al. **Anais dos Workshops Do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação**. Maceió: Sociedade Brasileira de Computação- SBC, 2015. p. 1154 - 1163.

39 *Idem Ibidem*.

40 GARCIA, Adriana. **Gamificação como prática pedagógica docente no processo ensino e aprendizagem na temática da inclusão social**. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015.

É válido mencionar pesquisa realizada com educadores, a qual revela que o estímulo de 53% dos entrevistados na realização de dinâmicas com jogos na educação é o fomento ao progresso do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes⁴¹.

Algumas das características que podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente para fomentar o interesse e melhor compreensão do conteúdo pelos alunos, todas essas já foram utilizadas em ambientes educacionais, conforme estudos⁴².

Nesse contexto, a gamificação surge como uma opção favorável para conectar o âmbito escolar com o universo dos jovens com escopo de ampliar a aprendizagem por meio de diversos métodos como o sistema de pontos e recompensas. Além disso, apresenta-se como um diferencial, por não focar nas tradicionais notas e sim utilizar elementos e mecânicas de jogos, uma experiência capaz de envolver cognitivamente os educandos⁴³.

A primeira é o sistema de pontos, que pode ser utilizado de diferentes formas, entre elas, pontos de experiência, pontos resgatáveis, pontos de habilidade e reputação, ambos servem como motivação para alcançar o objetivo proposto.

Outro aspecto é o sistema de níveis que exibem o progresso do jogador e quando aplicado ao processo de ensino-aprendizagem fazem o aluno perceber o próprio progresso e, ainda, espera-se que a cada nova fase possa se aprender algo novo ou reforçar algo aprendido anteriormente.

O sistema de rankings também pode ser utilizado e servem para que os competidores tenham uma noção dos resultados obtidos pe-

41 PAULA, Fabiano Rodrigues de; FÁVERO, Rutinelli da Penha. A gamificação da educação na compreensão dos profissionais da educação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 15., 2016, São Paulo. **Anais**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Computação- Sbc, 2016. p. 1459 - 1465. (pag.3)

42 PEDRO, Laís Zagatti; ISOTANI, Seiji. Explorando o Impacto da Gamificação na Redução do Gaming the SySTEM em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 5., 2016, Uberlândia. **Anais do Workshops**. Uberlândia: Sociedade Brasileira de Computação- Sbc, 2016. p. 81 - 90.

43 ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera Cruz. Gamificação: Diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina (Org.). **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. p. 74-97. p.83

los demais jogadores, o que gera competição entre eles e existem de duas formas: o ranking que não “desestimula”, pois busca estimular o jogador mostrando ou a pontuação de seus amigos ou dos jogadores que o precedem e sucedem e o ranking infinito, que tem por objetivo impedir que o jogador fique estagnado em uma posição.

Além disso, os desafios e missões são utilizados com ensejo de orientar os jogadores para as atividades que devem ser feitas dentro do sistema e mantê-los motivados prosseguir no jogo.

Por fim, as medalhas se apresentam-se como uma exibição visual do sistema de pontos representando uma conquista do jogador, o que gera um encorajamento e pode motivar o estudante de diversas formas, até pelo desejo de colecioná-las⁴⁴.

Nessa perspectiva, o estudo evidencia que a gamificação é uma estratégia metodológica capaz de envolver o estudante nos conteúdos estudados, dando a esse um amplo significado, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, proporciona aos professores uma maior aproximação da linguagem dos alunos, fazendo com que a construção do conhecimento seja mais prazerosa⁴⁵.

Nesse diapasão, um dos projetos que já atuam com gamificação, trabalhando para empoderar mulheres e diminuir as discrepâncias de gênero no âmbito científico tecnológico, é a Organização Não Governamental (ONG) PrograMaria.

O meta-site tem como objetivos entusiasmar a discussão sobre o baixo percentual de mulheres nos supracitados campos, além de contribuir para que as jovens tenham oportunidade de aprender sobre programação e, desse modo, contribuir para a confiança e motivação de mais mulheres, para que elas adentrem nas tecno-ciências⁴⁶. Tudo isso pretende ser efetivado por meio de palestras, tutoriais, en-

44 KLOCK, Ana Carolina Tomé; CARVALHO, Mayco Farias de. Análise das técnicas de gamificação em ambientes virtuais de aprendizagem. **CINTED- Novas Tecnologias na Educação**, Joinville, v. 12, n. 2, p.1-10, dez. 2014.

45 ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera Cruz. Gamificação: Diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina (Org.). **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. p. 74-97. p.90

46 PROGRAMARIA. **Por que faltam mulheres no campo da tecnologia?:** E o que queremos fazer para mudar isso. Disponível em: <<https://www.programaria.org/sobre-nos/>>. Acesso em: 02 fev. 2019.

contros e eventos, para despertar o interesse de mais pessoas nesse assunto tão importante e relevante para o avanço da sociedade pós-moderna.

Desse modo, em virtude dos fatos mencionados, tendo em vista o cenário contemporâneo, que é delineado historicamente pela exclusão paulatina e camuflada das garotas no âmbito científico, fundado em conceitos sem nenhuma base científica comprovada e envoltos por estereótipos preconceituosos, é plausível a utilização da gamificação como uma respeitável ferramenta educacional, capaz de mitigar a desigualdade entre os gêneros no campo científico e tecnológico, que também é o escopo do projeto NinAcode, o qual será abordado melhor mais adiante.

Assim, é impreterível que a sociedade como um todo reivindique do Estado políticas públicas voltadas para a inclusão feminina nas STEM e que o terceiro setor também contribua para erradicar essa grave e notória realidade que inibe um maior avanço de tecnologias, que segregam, e que limitam os mais diversos progressos científicos e o desenvolvimento de, por exemplo, cidades inteligentes, que sejam sensíveis as graves problemáticas do universo feminino.

Por fim, tudo isso deve ser feito com o fito de efetivar os direitos fundamentais e a de democratizar a educação, sem restrições de nenhuma natureza, para as meninas, jovens, mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino, não somente no Brasil, mas no mundo, para que conjuntamente seja possível mudar a realidade retrógrada existente nos ambientes ora mencionados.

O CASO DA PLATAFORMA NINACODE

Dentro das perspectivas e problemáticas abarcadas por esta pesquisa, uma se faz primordial: compreender qual é o estado da arte do ingresso de mulheres e de pessoas que se identificam com o gênero feminino nos cursos da área tecnológica, especificamente no ensino superior. Entretanto, é fundamental, além de fornecer um diagnóstico, buscar alternativas para a situação ora constatada.

Nesse sentido, em razão de as estatísticas e censos apontarem para a deficiência e disparidade entre a quantidade de homens e mu-

lheres que adentram na supramencionada área⁴⁷, é urgente pensar em uma proposta de intervenção que atue diretamente no cerne no problema.

Diante disso, cabe estudar a proposta da Plataforma NinAcode, a qual surgiu dentro de um projeto de pesquisa, gestado no grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no ano de 2017.

O grupo de trabalho agregou pessoas do Direito, Psicologia, Ciência da Informação, Tecnologia da Informação, Design e parceiros no Instituto metrópole Digital e Instituto do Cérebro, todos estes lotados na já mencionada UFRN. No ano de 2018 a própria Universidade passou a apoiar a pesquisa, ao passo que compreendeu a urgência de estudar o problema da desigualdade de gênero nas STEM em alguns dos seus projetos de pesquisa e intervenção, o que permitiu agregar força de trabalho à equipe.

Cabe realçar que a relevância do tema reside na evidência do flagrante descompasso na presença nos cursos e mercado profissional de meninas e pessoas identificadas com o feminino na área de tecnologia e, em especial na Tecnologia da Informação (TI). A questão não é nova, tendo sido estudada há anos, sob a denominação mais ampla de flagrante descompasso da presença de meninas nas áreas STEM (*Science, Technology, Engineering and maths*).

Importa destacar, mais uma vez, que esse campo de investigação teve como precursora uma mulher, Ada Lovelace (1815-1852), reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina.

Desta feita, a Ciência da Computação e afins se notabiliza hoje pela presença consciente e ativista de meninas em todo o mundo, que vivenciam o dilema da falta de estímulo, seja da família, seja dos educadores, para que elas abracem essas carreiras, ainda consideradas por muitos como masculinas.

O problema tem natureza complexa, em geral de ordem cultural, mas interessa bastante ao direito como uma evidência da necessidade de eliminação das desigualdades entre os gêneros, principal-

47 UNESCO BRASIL. **Decifrar o Código:** educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília, 2018. 84 p.

mente no mundo onde a TI faz parte do cotidiano, das profissões e do exercício da cidadania.

Frente a isso, a Plataforma NinAcode foi intitulada assim justamente por se compreender que era necessário que a identidade nominal da iniciativa remetesse ao que ela propõe e ao que ela pretende atingir: meninas, mulheres e pessoas que se identificam assim, no geral.

A ideia se propõe, em primeiro momento, a investigar o motivo e as circunstâncias do inexpressivo número de mulheres que ingressam na TI. A partir disso, pretende-se, por meio de uma equipe interdisciplinar, desenvolver uma Plataforma que, por meio da gamificação, trabalhará formas de ensinar conceitos básicos voltados à tecnologia. O objetivo é que crianças e adolescentes, do gênero feminino, e que se identifiquem com este, tenham acesso às Ciências Tecnológicas para que só então possam descobrir se têm interesse e/ou afinidade com a área e se querem seguir carreira nela.

O projeto defende que se não existe contato inicial das meninas com as TI, não existe acesso democrático, portanto, não existe liberdade de escolha, de fato.

Mundialmente existem outras iniciativas que propagam a inclusão das mulheres nas áreas da STEM (Science, Technology, Engineering and maths). Contudo, no Brasil, propostas como essa ainda são escassas, o que torna urgente o fomento a estudos que pensem em alternativas, bem como políticas públicas que se voltem para erradicar esses índices alarmantes.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, resta evidente que a disparidade entre o número de homens e mulheres que ingressam nas ciências, tecnologias, engenharias e matemática (STEM) é latente, mesmo na realidade brasileira, em que mais de a metade da população é composta por mulheres.

Essa constatação e o tratamento nada isonômico conferido ao gênero feminino, quando o assunto é ingressar no âmbito tecnológico, fere inúmeros preceitos constitucionais, a exemplo do direito de tratamento igual entre gêneros, a ampla promoção à educação,

à pesquisa e à tecnologia, além de ser um obstáculo evidente para a luta pelo desenvolvimento regional, ao passo que não existe incentivo para que a maior parte da população adentre no campo da produção tecnológica.

Depreendeu-se que é urgente e fundamental que cada vez mais as mulheres possam acessar esta ampla área do conhecimento e que sejam estimuladas a pensar em melhorias para suas semelhantes, sabendo das reais necessidades do gênero, para que possam assim contribuir ativamente para a história presente e futura.

Assim, urge que políticas públicas para a inclusão do gênero feminino, e de pessoas que se identificam com este, sejam pensadas, de modo a democratizar o acesso a educação de livre escolha da mulher, independente da área.

Também pode-se concluir que a gamificação aparece como uma opção favorável para ligar a escola com o universo dos jovens, objetivando ampliar a aprendizagem por meio de diversos métodos, a exemplo do sistema de pontos e recompensas.

Ademais, esta pesquisa abordou o caso da Plataforma NinAcode, uma iniciativa que surgiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda em execução e que pretende, inicialmente, investigar o motivo e as circunstâncias do inexpressivo número de mulheres que ingressam na TI. A partir disso, pretende-se, por meio de uma equipe interdisciplinar, desenvolver uma plataforma que, por meio da gamificação, trabalhará formas de ensinar conceitos básicos voltados à tecnologia.

Por fim, é fundamental realçar que, além de ser um direito do gênero feminino, que sequer deveria, em pleno século XXI, ainda ter que ser discutido, trata-se de um direito humano básico ser tratado com igualdade, dignidade e sem nenhum tipo de discriminação. Contudo, como o Brasil ainda engatinha, no que tange o tema, é urgente que os estudos passem para o plano da implementação e que as metas e objetivos nacionais e mundiais se convertam em ações, para que só então possa se falar em acesso democrático e pleno à educação.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera Cruz. Gamificação: Diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina (Org.). **Gamificação na educação**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. p. 74-97.
- BRASIL. Constituição Federal de 1988. **Institui a Carta Magna**.
- SANTOS, B. de S. **Reconhecer para libertar**: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade, p.56.
- CABRAL, Carla Giovana. As mulheres nas escolas de engenharia brasileiras: História, educação e futuro. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, v. 1, n. 4, p.9-19, 2005.
- CASCAES, Tânia Rosa F.; SOUZA, Tatiana de; CARVALHO, Marília Gomes de. Gênero, diversidade sexual, ciência e tecnologia: a escola como agente de mudanças. **Caderno de Gênero e Tecnologia**, Curitiba, n. 1718, p.28-41, 05 jan. 2009. Semestre.
- FIGUEIREDO, Mercia; PAZ, Tatiana; JUQUEIRA, Eduardo. Gamificação e educação: um estado da arte das pesquisas realizadas no Brasil. In: 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO., 2015, Maceió- Al. **Anais dos Workshops Do IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação**. Maceió: Sociedade Brasileira de Computação-SBC, 2015. p. 1154 - 1163.
- GARCIA, Adriana. **Gamificação como prática pedagógica docente no processo ensino e aprendizagem na temática da inclusão social**. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015.
- GURUMURTHY, Anita. **Igualdade de gênero através do acesso as TICs e da sua apropriação**: uma abordagem com base nos direitos. Disponível em: <<https://politics.org.br/edicoes/igualdade-de-g%C3%AAnero-atrav%C3%AAs-do-acesso-%C3%A0s-tics-e-da-sua-apropria%C3%A7%C3%A3o-uma-abordagem-com-base>>. Acesso em: 15 jan. 2019.
- IBGE. **Quantidade de homens e mulheres**. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>>. Acesso em: 20 fev. 2019.
- INEP; EDUCAÇÃO, Ministério da. **Censo da Educação Superior**: Notas Estatísticas 2017. Disponível em: <<http://download.inep.gov.br/educa>

cao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2019.

KLOCK, Ana Carolina Tomé; CARVALHO, Mayco Farias de. Análise das técnicas de gamificação em ambientes virtuais de aprendizagem. **CINTED-Novas Tecnologias na Educação**, Joinville, v. 12, n. 2, p.1-10, dez. 2014.

LIMA, Fabiane Alves de. **Mulheres na tecnociência**: Depoimentos e vivências de mulheres nos cursos de computação da universidade tecnológica federal do Paraná. 2014. 136 f. Tese (Mestrado) - Curso de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

MACIEL, Ariana Durce. O lugar das mulheres: Gênero e inclusão digital. **P2p e Inovação**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p.67-85, set. 2015. Semestral.

NOBEL. **52 Prêmios Nobel para Mulheres**. Disponível em: <<https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

OLINTO, G. A inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. **Inclusão Social**, Brasília, v. 5, n. 1, p. 68-77, jul./dez. 2011.

ONU. **As mulheres e as mudanças no mundo do trabalho**: por um planeta 50-50, artigo da diretora executiva da ONU Mulheres. 2017. Disponível em: <<http://www.onumulheres.org.br/noticias/as-mulheres-e-as-mudancas-no-mundo-trabalho-por-um-planeta-50-50-artigo-da-diretora-executiva-da-onu-mulheres/>>. Acesso em: 10 jan. 2019.

PAULA, Fabiano Rodrigues de; FÁVERO, Rutinelli da Penha. A gamificação da educação na compreensão dos profissionais da educação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 15., 2016, São Paulo. **Anais**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Computação- Sbc, 2016. p. 1459 - 1465.

PEDRO, Laís Zagatti; ISOTANI, Seiji. Explorando o Impacto da Gamificação na Redução do Gaming the SySTEM em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 5., 2016, Uberlândia. **Anais do Workshops**. Uberlândia: Sociedade Brasileira de Computação- Sbc, 2016. p. 81 - 90.

PROGRAMARIA. **Por que faltam mulheres no campo da tecnologia?:** E o que queremos fazer para mudar isso. Disponível em: <<https://www.programaria.org/sobre-nos/>>. Acesso em: 02 fev. 2019.

QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de; MOREIRA, Josilene Alves. Gênero e inclusão de jovens mulheres nas ciências exatas, nas engenharias e na computação. In: REDOR, 18., 2014, Recife. **Anais**. Recife: -, 2014. p. 3483 - 3500.

RELATÓRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO MUNDIAL: igualdade de gênero e desenvolvimento. Washington D.c: Banco Mundial, 2012.

SCHIEBINGER, L. **O feminismo mudou a ciência?** Tradução de Raul Fiker. Bauru, SP: EDUSC, 2001.

SCHWARTZ, Juliana; CASAGRANDE, Lindamir Salete; LESZCZYNSKI, Sonia Ana Charchut and CARVALHO, Marília Gomes de. **Mulheres na informática: quais foram as pioneiras?** *Cad. Pagu* [online]. 2006, n.27, pp.255-278. ISSN 0104-8333.

UNESCO BRASIL. **Decifrar o Código:** educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília, 2018. 84 p.

Gestão pública e governo eletrônico: os processos institucionais na UFRN

Neyjmme de Fátima Medeiros

BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL

A administração pública no Brasil passou por vários modelos de gestão ao longo dos anos e cada um desses modelos está vinculado a um período histórico e político específico e possui características marcantes que os diferenciam: o patrimonialista, burocrático e o gerencial. Em todos esses períodos, a constante busca pela ética e eficiência vem trazendo novas formas de controle em relação à condução dos atos públicos.

A gestão pública no Brasil evoluiu através de três modelos, cada qual no seu contexto histórico e em sua época, mas sem que fossem totalmente substituídos: a Administração pública patrimonialista, a Administração pública burocrática e Administração pública gerencial. A Administração pública patrimonialista tem como característica a falta de diferenciação entre o público e o privado, tendo a corrupção e o nepotismo como características dessa forma de governo. A administração pública burocrática surgiu na segunda metade do século XIX como forma de combater o sistema patrimonialista, implantando princípios como a profissionalização, a hierarquia funcional, a impessoalidade e o formalismo; Este modelo instituiu os controles administrativos como prioridade do Estado. A administração pública gerencial (*New Public Management*) surgiu a partir da segunda metade do século XX como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial; tem como princípios a eficiência, a necessidade de redução dos custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão (BRASIL, 1995)⁴⁸.

O primeiro modelo de administração pública no Brasil, o patrimonialista, não faz distinção entre os bens públicos e privados. O

48 Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília: Presidência da República, 1995.

sistema estava pautado na dominação tradicional, uma espécie de troca entre os governantes e seus súditos.

Com o surgimento do capitalismo industrial e das democracias, as sociedades se tornaram mais complexas, e o patrimonialismo não conseguiu mais suprir as necessidades da sociedade e assim, surgiu o modelo burocrático como alternativa, separando o público do privado, em busca da redução da corrupção e o do nepotismo, visando tornar o estado mais eficiente. As principais características da administração burocrática são: a impessoalidade, o profissionalismo, a hierarquia funcional e a ideia de carreira pública.

De acordo com Bresser Pereira⁴⁹, durante a década de 30 já estavam presentes alguns traços da administração burocrática na administração brasileira. Porém, a eficiência pregada pelo modelo não ficou evidente na prática, principalmente pelo surgimento das disfunções burocráticas: resistência a mudanças, rigidez e falta de inovação, apreço extremo as regras e não com resultado, excessiva formalização, e lentidão no processo de decisão. Ficou claro que a burocracia não garantia qualidade, economia e rapidez na prestação de serviços à população. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.

Como alternativa ao modelo burocrático surge o modelo gerencial pautado na utilização de ferramentas de gestão originadas da administração privada e pensamentos neoliberais que defendem o estado mínimo. Os anos seguintes apontam o modelo gerencial como principal alternativa. Este seria uma solução para as disfunções burocráticas.

Ainda de acordo com Bresser Pereira, a busca pelo modelo gerencial não provém apenas da diferenciação de estruturas e complexidade crescente dos problemas a serem enfrentados. No que se refere ao ciclo da administração gerencial temos as seguintes fases: o Modelo Gerencial Puro, o *New Public Management* e o *Public Service Orientation*.

49 BRESSER PEREIRA, L. C. (janeiro – abril de 1996). **Da Administração Pública Burocrática à Gerencial**. Revista do serviço público, V.47,n.1, p.7 – 29, 1996.

Posteriormente, na década de 80, surge o New Public Management (ou Nova Gestão Pública), que apresenta a premissa da efetividade e a busca da qualidade na prestação de serviços a sociedade, priorizando a satisfação das necessidades dos cidadãos e não os interesses da máquina pública.

Na década de 90 a discussão da reforma do Estado torna-se um tema central a nível mundial. Verificamos justamente nesse período a introdução da Administração Pública Gerencial no Brasil. O governo do presidente Fernando Collor (1990-1991) acenou com medidas de cunho neoliberal, como o enxugamento da máquina e redução dos gastos públicos. Neste período houve extinção de cargos e demissão de servidores públicos, além de um controle mais rígido no âmbito das estatais.

Posteriormente, na administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tem início a conhecida Reforma do Estado, no ano de 1995. Nesse período, a principal dificuldade do Brasil não seria a governabilidade e sim a governança. A democracia garante um nível aceitável de governabilidade, porém, a restrita capacidade de implementação das políticas públicas, somada a elevada rigidez e ineficiência da máquina administrativa evidenciam os problemas de governança. Neste contexto, o principal objetivo da reforma seria o fortalecimento da capacidade de governar.

A significativa evolução da governança, principalmente no âmbito federal, fez surgir um novo termo: nova governança pública – que promove a inclusão da sociedade e do mercado na tomada de decisão. Para isso, o governo investiu em capacitação de servidores, utilizando sistemas informatizados de comunicação, potencializados pelo uso da internet. E assim, estes canais vão facilitando o acesso aos vários serviços demandados pelos cidadãos.

Com a disseminação da internet, principalmente no fim dos anos 90, o setor público inicia um processo de evolução quanto à utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC na prestação de serviços públicos. Diante disso, a difusão de novas tecnologias de informação e de comunicação (TIC) fez emergir um novo governo de gestão pública denominado governo eletrônico.

Dessa forma, entende-se que governo eletrônico pode ser o conjunto de ações governamentais direcionadas para a disponibilização

de serviços e informações a sociedade civil, através da abertura de canais diretos entre cidadãos e governo, mediante o uso da TIC, com destaque para o uso da internet.

De acordo com Abruccio (1997), o Governo Eletrônico (ou Governo Digital) atua como uma ponte entre a estratégia governamental e a operacionalização dos serviços, além de ampliar o relacionamento com a sociedade. É um instrumento de melhoria na prestação dos serviços públicos, mediante a utilização de ferramentas pautadas nas diversas tecnologias da informação. O governo eletrônico é o instrumento com maior potencial para elevar a eficiência governamental no Brasil⁵⁰.

O papel do governo eletrônico é enfatizado e visto como uma mudança de paradigma da gestão governamental ou um novo conceito de governo, e sua aplicação na administração pública tem como objetivo melhorar os serviços e a informação oferecida, simplificar processos de suporte institucional e facilitar a criação de canais que permitam aumentar a transparência e a participação cidadã.

No Brasil, o governo eletrônico ingressou na agenda de políticas do governo federal desde 2000, incorporando uma visão avançada da aplicação estratégica da TI na construção da sociedade da informação com objetivo de potencializar o uso dessas tecnologias e a fim de ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços públicos e tem sido considerado por diversos estudos como uma das mais importantes ações na administração pública brasileira, alcançando resultados positivos em relação ao acesso às informações, redução de custos, aumento da transparência e redução da corrupção. Segundo Rothberg⁵¹ (2010, p 2), o governo eletrônico se relaciona à gestão pública e “envolve a prestação de serviços que usualmente exigiram a presença em filas, o preenchimento de formulários em papel e a espera de prazos maiores”.

50 ABRUCCIO, F.L. **O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente**. Caderno ENAP, Brasília, n. 10, p. 1 – 52, 1997.

51 ROTHBERG, D. **Portais eletrônicos de governo e a contribuição da informação e da comunicação para a expansão da cidadania**. In: Encontro da ANPOCS, Caxambu, 2010.

De acordo com Vaz⁵² (2003), promover a cidadania através do e-gov significa promover direitos de acesso à informação de interesse particular, de acesso aos serviços públicos, ao próprio tempo, direito a ser ouvido pelo governo, ao controle social do governo e à participação. Segundo Rothberg (2010),

o termo democracia digital (e-Democracia) se relaciona à formulação compartilhada de políticas públicas e abrange formatos de participação política que complementam e enriquecem (ou confrontam, conforme as diferentes visões do problema) as instituições da democracia representativa.

Sobre a perspectiva de participação e controle por parte dos cidadãos, Breder⁵³ ressalta que, no Brasil, esta se dá

através de instrumentos de informação e transparência, de audiências e consultas públicas, de orçamentos com participação popular, de participação em colegiados administrativos, em conselhos setoriais de gestão e através de representações e denúncias, sendo este controle social de fundamental importância no processo democrático, não somente quanto à fiscalização da prestação de contas ou da regularidade dos atos governamentais, mas no tocante à legitimidade, economicidade e adequação dos atos governamentais para o alcance do bem comum e do interesse público.

Sendo assim, o uso das TIC na transformação dos processos internos do governo e na melhoria dos serviços públicos tornou-se condição essencial para mudança do paradigma de eficiência do setor público.

O reconhecimento do potencial das TIC enquanto ferramentas da transformação de processos internos do governo e de entrega de serviços públicos viabilizou a implementação de reformas no setor e dessa forma o bom desempenho do setor público tornou-se dependente do uso de TIC e, em particular, de programas de governo eletrônico.

52 VAZ, J.C. **Uso da internet pelos governos e promoção de cidadania**. Revista UNICSUL, Cruzeiro do Sul, V.8, 2010.

53 BREDER, J.C. **Controle Social: Um modelo em construção: contribuições do Tribunal de Contas da União**, 2008 p.191.

Nesse cenário, as tecnologias digitais têm muito a oferecer, tendo em vista que nos processos de promoção de uma sociedade da informação, há um reconhecimento generalizado de que uma das estratégias mais importantes a ser adotada é a do desenvolvimento de ações voltadas ao estabelecimento de um governo adaptado às características e às necessidades de uma nova era do conhecimento, em que a adoção destas novas TIC venha a proporcionar melhorias nos processos de gestão interna e de prestação de serviços à sociedade.

OS PROCESSOS ELETRÔNICOS NA UFRN

No mundo atual, as rápidas transformações, aliadas às inovações tecnológicas, e as pressões da sociedade, demandam, exigem e impõem às Instituições permanentes mudanças que reflitam na eficiência e eficácia de seus processos e a conseqüente melhoria dos serviços prestados. Assim, no contexto de se pensar uma Educação Superior de qualidade que esteja atenta às novas necessidades de gerenciamento das informações e do conhecimento, é importante pensar ações que possam resultar na celeridade e melhoria dos processos institucionais.

Dentro dessa perspectiva, em atendimento ao Decreto nº 8.539 de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização dos processos administrativos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, registra avanço na implantação de processos eletrônicos com o objetivo de migrar os trâmites administrativos para o formato digital. Entre essas ferramentas, está o módulo mesa virtual, onde será possível realizar a movimentação, o armazenamento e a recuperação de processos.

Nesse contexto de inovações, ainda existem alguns processos que são encaminhados impressos, como é o caso dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação. Atualmente, a UFRN tem 112 cursos de graduação, sendo 102 na modalidade presencial e 10 a distância. E compete ao Setor de Acompanhamento de Cursos da PROGRAD prestar assessoramento no processo de elaboração e atualização desses projetos.

Atualmente, é disponibilizado um formulário, via Google drive para preenchimento das informações referentes ao PPC. Após

preenchimento, os cursos enviam por e-mail o documento. Diante da necessidade de atender as exigências legais e pensando numa série de benefícios como uma maior eficiência, redução de custos e melhorias do ponto de vista da sustentabilidade, a Diretoria de Desenvolvimento pedagógico/PROGRAD/UFRN tenta, através da Superintendência da UFRN - SINFO, viabilizar um possível módulo de PPC no SIGAA e com essas medidas, não somente atender às exigências de ordem legal como também reduzir custos, ter um maior compartilhamento das informações e de conhecimento e uma maior integração dos serviços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O país passou, ao longo dos anos, por modificações nos modelos de gestão pública. Cada um deles, o patrimonialista, o burocrático ou gerencial, retrata um período específico da história política do país e da visão dos governantes sobre a condução do Estado e os respectivos modelos de administração que levam a um caminho para o tratamento da coisa pública.

Entende-se que na gestão pública, há certo consenso entre os autores da área, de que o uso de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) podem transformar positivamente a forma como o governo se relaciona com o cidadão, possibilitando uma convivência mais democrática e participativa entre estes. Sendo assim, a adoção de meios eletrônicos para a prestação de serviços exige que as informações estejam disponibilizadas na Internet e sejam fáceis de usar, possibilitando um amplo acesso por parte do público em geral.

Desse modo, é positivo afirmar que o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), principalmente a Internet, e a implantação de programas de Governo Eletrônico trazem muitos benefícios para a administração pública brasileira em termos de economicidade, sustentabilidade, concentração de informações, melhoria nos fluxos de trabalho, maior agilidade e oferta de serviços públicos de forma mais acessível, eliminando-se filas nos balcões de atendimento público, de acordo com os autores pesquisados contribuindo dessa forma para melhorar a eficiência e a qualidade da prestação dos serviços públicos online.

REFERÊNCIAS

- ABRUCCIO, F.L. **O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente.** Caderno ENAP, Brasília, n.10, p. 1 – 52,1997.
- Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.** Brasília: Presidência da República, 1995.
- BREder, J.C. **Controle Social: Um modelo em construção: contribuições do Tribunal de Contas da União,** 2008 p.191.
- BRESSER PEREIRA, L. C (janeiro – abril de 1996). Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. Revista do serviço público, V.47,n.1, p.7 – 29, 1996.
- ROTHBERG, D. **Portais eletrônicos de governo e a contribuição da informação e da comunicação para a expansão da cidadania.** In: Encontro da ANPOCS, Caxambu,2010.
- VAZ, J.C. **Uso da internet pelos governos e promoção de cidadania.** Revista UNICSUL, Cruzeiro do Sul, V.8, 2010.

A virtualização do processo avaliação especial de desempenho dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seus desdobramentos

Suziane Rodrigues Bezerra

Yanko Marcius de Alencar Xavier

Patrícia Borba Vilar Guimarães

CONTEXTUALIZAÇÃO

O servidor público tem papel extremamente relevante na construção de uma administração pública eficiente e voltada para os melhores resultados. Nesse contexto, todas as ações que envolvem a gestão de pessoas têm extrema relevância para o desenvolvimento de sujeitos conscientes de seu papel no exercício de cargos públicos. Assim, a avaliação especial de desempenho do servidor público no período de estágio probatório, exigida a partir da emenda constitucional 19/1998¹, que tem por finalidade analisar, no período de três anos se o profissional aprovado em concurso público possui as competências necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições, mostra-se imprescindível ao esforço de criar mecanismos de avaliação que expressam compromisso com os princípios da ética e da justiça.

Dessa forma, a grande motivação deste trabalho foi pensar em um modelo de acompanhamento que trouxesse mais transparência, produtividade e eficiência ao processo de avaliação especial de desempenho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nesse contexto, nosso maior desafio é transpor a barreira do processo físico ainda vigente para esse processo, e sugerir a virtualização do mesmo. E ainda, diante da necessidade identificada de organização, padronização, desburocratização e disponibilização das informações referentes ao processo, sugere-se a criação de um módulo dentro do Sistema Integrado de Recursos Humanos que centralize essas informações.

1 BRASIL. Emenda Constitucional nº19, de 04 de junho de 1998. **Diário Oficial da União**, Brasil, 1998, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Ecm19.htm>. Acesso em 12 out. 2018.

Além disso, a autora deste trabalho é a responsável pelo gerenciamento das informações referentes aos servidores em avaliação na Escola Agrícola de Jundiá/ UFRN e diante das crescentes demanda pela gestão eficiente do tempo e dos recursos, e ainda, buscando acompanhar a evolução tecnológica contemporânea a que se vincula a Administração Pública, sugerimos adaptar todo processo de acompanhamento do servidor em estágio probatório adotado pela UFRN para o meio digital.

Historicamente a administração pública tem resistido aos processos eletrônicos quer seja por uma falsa sensação de segurança, quer seja pela própria falta de tecnologia capaz de atender esse fim.

De acordo com Schiefler², a existência de processos administrativos físicos é responsável por causar diversos prejuízos à sociedade, especialmente àqueles cidadãos que dependem da administração pública para defender seus direitos, tendo em vista os embaraços provocados pelo processo de logística e arquivo dos autos. Dessa forma, os processos administrativos físicos são responsáveis por obstar o interessado de obter acesso às informações do processo, de forma a impedir o exercício pleno de seus direitos.

Dessa forma, existe uma tendência no sentido de conduzir os processos administrativos eletronicamente com vistas ao alcance dos princípios constitucionais da eficiência, atualidade e celeridade.

O decreto 8.539³ de 08 de outubro de 2015 que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, tem os seguintes objetivos:

2 SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Fundamentos jurídicos que tornam obrigatória a tramitação eletrônica dos processos administrativos e a disponibilização na rede mundial de computadores (internet). In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). **Tecnologia jurídica & direito digital**: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 167-190.

3 BRASIL. **Decreto nº 8539**, de 08 de outubro de 2015. BRASIL. Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 out. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8539.htm>. Acesso em 05 nov. 2018.

I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;

II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade;

III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação; e

IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.

Analisar o atual processo de avaliação especial de desempenho adotado pela UFRN e propor melhorias a partir da virtualização do mesmo, bem como, propor a criação de um ambiente informacional destinado a automatizar, institucionalizar e gerenciar as informações e atividades referentes à avaliação.

Como objetivos específicos foram delineados:

- Gerenciar as informações do estágio probatório por meio do Sistema Integrado de Recursos Humanos da UFRN;

- Criar uma cartilha com informações referentes ao estágio probatório em formato eletrônico.

- Eliminar a necessidade de impressão do processo físico reduzindo custos e danos ambientais;

- Eliminar a necessidade de distribuição e transporte do processo físico tornando o processo mais célere;

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

A partir de 1990, o Brasil passa por uma reforma na Administração Pública, indo de um modelo burocrático para um modelo gerencial. Esta nova maneira de administrar o serviço público apresenta-se orientada para resultados e é pautada na eficiência administrativa voltada totalmente para os interesses da sociedade.

Para Meduar⁴ a eficiência é atualmente o princípio que norteia toda Administração Pública, no sentido de produzir resultados rápidos e precisos para satisfazer as necessidades da população.

Meireles⁵ afirma que a eficiência é um dever administrativo, ou seja, uma exigência para que a atividade administrativa fosse exercida com perfeição, presteza e rendimento profissional, pois não basta a atividade administrativa ser exercida apenas com observância da legalidade, necessitando a produção de resultados positivos para o serviço público.

Para Meireles⁶ este é o mais moderno dos princípios dos atos administrativos, já que não mais se satisfazem com sua simples legalidade, exigindo igualmente que possuam resultados positivos.

Vale salientar que a inclusão da eficiência como princípio constitucional, concedeu-lhe caráter vinculante, dessa forma, o estado é obrigado a cumprir esse princípio em todas as suas atividades. Salienta-se também que ao escolher meios através dos quais o Estado buscará satisfazer as necessidades coletivas, é imperioso considerar ser obrigatória a eficiência em atingir os objetivos públicos. Assim, de acordo com esse princípio, a prestação do serviço público deve ocorrer de modo que atenda efetivamente às necessidades da coletividade, com o maior aproveitamento possível e com baixo custo.

EFICIÊNCIA E AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

No Estado brasileiro, o ingresso dos profissionais em cargos efetivos do serviço público está condicionado ao estágio probatório, como mecanismo para a concessão da estabilidade. De acordo com a Lei federal 8.112⁷, o Estágio Probatório é o período de 36 meses em que o servidor é avaliado em suas aptidões e capacidades para

4 MEDUAR. Odete. **O Direito Administrativo Moderno**. 10.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006.p.170.

5 MEIRELES. Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014,p.226.

6 MEIRELES. Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 30 ed. São Paulo: Malheiros. Editores, 2005, p.110.

7 BRASIL. **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018.

o desempenho do conjunto das atribuições e responsabilidades do cargo público.

Para Fraga e Martins⁸, o estágio probatório é uma obrigação a qual o servidor público é submetido, baseado no princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público do qual se espera o melhor desempenho. Assim, subentende-se que, a avaliação especial de desempenho deve ser compreendida em um contexto mais amplo, de valorização e aperfeiçoamento, ao levar em conta a dimensão dinâmica do ambiente e, especialmente, ao oferecer respostas a desejos e aspirações humanas.

Durante este tempo de avaliação, será averiguado se o servidor possui capacidade para exercer o cargo, sendo submetido a uma avaliação que observa os seguintes aspectos: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

Para Lucena⁹, essa avaliação constitui uma etapa essencial na gestão de pessoas e necessita alcançar muito mais que controle. Entretanto, muitos processos de avaliação de desempenho ainda estão voltados para manter os indivíduos sob controle, caracterizando-se apenas como um instrumento de punição. Essa realidade, certamente, se distancia do modelo de gestão almejado pelas instituições modernas que prezam o pleno desenvolvimento de seus colaboradores.

De acordo com Modesto¹⁰, o grande desafio para a administração pública é a realização um processo avaliativo, contínuo, ordenado, garantidor dos direitos do servidor, mas, ao mesmo tempo capaz de depurar resultados que identifiquem os agentes que realmente estão aptos ao desempenho de funções públicas. Consta-se que a avaliação de desempenho precisa deixar de funcionar como simples instrumento de obrigação burocrática, e, finalmente, passar a introduzir as mudanças necessárias à prática de uma cultura de democrática, com base na obtenção de resultados efetivos .

8 FRAGA, C. G. S.; MARTINS, J. R.A (in)eficácia do estágio probatório do servidor público como instrumento de avaliação da Administração Pública Municipal. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, v. 1, n. 10, 2, p. 5991-6031, 2012.

9 LUCENA. M. D. da S. **Avaliação de Desempenho**. São Paulo: Atlas. 1992, p.70.

10 MODESTO, P. **Estágio Probatório: Questões Controversas**. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 12, mar. 2002,p.1-28.

Afinal, depois da aprovação em concurso público é a avaliação especial de desempenho que passa a analisar a capacidade do servidor em relação as atribuições do cargo que ocupa com o objetivo de desenvolver profissionais cada vez mais aptos ao serviço.

EFICIÊNCIA E VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS

Diante da relevância de se conduzir os processos de trabalho da maneira eficiente sugere-se a virtualização/eletронização desse processo e que o gerenciamento de todas as informações e exigências impostas ao servidor em avaliação sejam realizadas eletronicamente por meio de um módulo a ser desenvolvido no sistema de gestão de Recursos Humanos, Sigrh, adotado na UFRN.

Numa abordagem mais ampla, Gustavo Schiefler¹¹ defende que o ambiente de divulgação das informações que compõem os diálogos público-privados deve ser preferencialmente eletrônico, para que seja possível o uso da rede mundial de computadores (internet, bem como que esse é o local de fácil acesso mais adequado para se conferir transparência ativa às informações públicas, o que representa uma medida consentânea à realidade tecnológica contemporânea.

Nesse sentido e em consonância com o decreto 8539/2015¹² que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, tornar este processo totalmente eletrônico irá trazer importantes ganhos de celeridade, produtividade e eficiência.

E ainda, em atenção ao princípio da atualidade e a possibilidade de verter os seus processos administrativos físicos em processos administrativos eletrônicos, possibilitando e promovendo a sua disponibilização na rede mundial de computadores. Verificando-se ainda

11 SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Op. cit, 2018, p.175.

12 BRASIL. **Decreto nº 8539**, de 08 de outubro de 2015. Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 out. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8539.htm>. Acesso em 05 nov. 2018.

que a Administração Pública deve acompanhar a modernidade do estado da técnica, no sentido de adequação à realidade tecnológica contemporânea para prestar serviços de qualidade à sociedade. Pensando em acompanhar a evolução tecnológica contemporânea a que se vincula a Administração Pública sugerimos adaptar todo processo de acompanhamento do servidor em estágio probatório adotado pela UFRN para o meio digital.

O Plano de Gestão 2015-2019¹³ da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Resolução 023/2015-CONSUNI, de 25 de novembro de 2015 estabelece como um dos objetivos da instituição:

Fortalecer a modernização da gestão, intensificando a Integração entre as atividades-fim e as atividades meio, entre a administração superior e as demais instâncias administrativas, com participação e transparência, objetivando alcançar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações realizadas.

Nesse contexto, o Sistema Integrado de Recursos Humanos que atualmente informatiza os procedimentos da área de gestão do setor pessoal da UFRN que gerencia férias, frequência, ponto eletrônico, banco de vagas, avaliação funcional, capacitação e outros passaria a contar com um módulo referente ao acompanhamento do servidor em estágio probatório. Dessa forma, todas as informações relevantes ao envolvidos nesse processo de avaliação, a saber: chefias, tutores e servidores avaliados estariam facilmente acessíveis.

A idéia de criar um módulo dentro do Sistema de Gestão Integrado, o Sigrh, coaduna-se com os conceitos defendidos por De Cicco¹⁴, ele explica que, uma combinação de processos, procedimentos e práticas utilizados em uma organização para implementar suas políticas de gestão e que pode ser mais eficiente na consecução dos

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Resolução nº 023/2015-CONSUNI, de 25 de nov de 2015.** Disponível em: < <https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/PlanoGeralDeAcaoGestao2015-2019.pdf> >. Acesso em: 03 out. 2018.

14 DE CICCIO, Francesco. **Sistemas Integrados de Gestão: Agregando Valor aos Sistemas ISSO 9000**, QSP, São Paulo, 2004, p.21.

objetivos oriundos delas do que quando há diversos sistemas individuais se sobrepondo.

O módulo terá como finalidade o desenvolvimento de uma aplicação de automação e institucionalização dos dados, documentos e ações referentes à avaliação especial de desempenho na UFRN e será dividido em: Fichas de acompanhamento, legislação, tutorização organizacional e cartilha do servidor em estágio probatório.

Fichas de Acompanhamento: Estarão disponíveis fichas em branco e, após o correto preenchimento pela chefia esses formulários passarão a compor a documentação que, futuramente, fará parte do processo de homologação do estágio probatório.

Legislação: Nessa aba estará disponível a legislação que regulamenta o período. São elas: Lei Federal nº 8.112/1990; Resolução n.º 008/2006-CONSAD, de 20 de junho de 2006 e Resolução n.º 083/2006-CONSEPE, de 20 de junho de 2006.

Tutorização organizacional: Identifica-se que muitos tutores possuem dificuldade de compreender o seu papel durante o acompanhamento do servidor em estágio probatório, por isso, a aba conterá a descrição do programa de tutorização organizacional, criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2015.

O programa possui como principal objetivo designar um servidor experiente para apoiar um servidor recém-admitido, com intenção de que este possa realizar uma apreensão mais rápida da cultura, das normas e da sua tarefa, de forma a adaptar-se mais rapidamente e desempenhar com qualidade e criatividade suas atribuições diárias.

Cartilha do servidor em estágio probatório: esta cartilha possuirá formato digital e reunirá de maneira clara, objetiva e dinâmica as informações importantes referentes à avaliação de desempenho, entre elas, os prazos a serem obedecidos no período, critérios de avaliação e outros. Na prática funcionará como um guia do servidor em avaliação.

A ideia de tornar o processo de avaliação especial de desempenho em processo eletrônico atenderá aos princípios da atualidade e da celeridade.

O princípio da atualidade é previsto no artigo 6º da Lei federal nº 8.987¹⁵ de 1995 e é regulamentado pelo inciso IV do artigo 175 da Constituição Federal e prevê que toda prestação de serviços pressupõe atendimento adequado ao usuário. E como serviço adequado conceitua-se aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade. O artigo 6º dessa lei define com propriedade o princípio.

Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Por isso, o princípio da atualidade também é conhecido como princípio do aperfeiçoamento, pois prevê que Administração tem a obrigação de aproveitar na prestação de serviços os avanços científicos e tecnológicos, que irão proporcionar uma melhoria nos serviços prestados. Na prática funciona como um encadeamento do princípio da eficiência.

Dessa forma verifica-se que a administração pública está vinculada à prestação de serviços que acompanhe a modernidade do estado da técnica no sentido de adequação a realidade tecnológica contemporânea para prestar serviços de qualidade. Assim, uma evolução tecnológica contemporânea a que se vincula a Administração pública em razão do princípio da atualidade é a possibilidade de verter o processo de avaliação especial de desempenho do servidor em processo eletrônico.

15 BRASIL. **Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.** Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm>. Acesso em: 10 dez. 2018.

Por sua vez, a celeridade também é um princípio apto a fundamentar a virtualização do processo de avaliação especial de desempenho. O princípio da celeridade, incluído no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal¹⁶ pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro¹⁷ entende que o dever de celeridade nos trâmites processuais, independentemente da esfera em que estejam situados, é consectário do princípio da razoabilidade, no qual o intuito evidente é o de acelerar essa tramitação, o que somente será possível com a criação de instrumentos adequados.

Dessa forma, fica claro que a celeridade não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas, um fundamento que precisa envolver toda atuação durante os trâmites processuais. Constituindo-lhe, inclusive, obrigação de criar mecanismos e instrumentos adequados para tornar cada procedimento mais ágil. Ou seja, dever da administração organizar-se para atender as demandas da sociedade em tempo hábil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse contexto, nota-se a pertinência da virtualização de processos e sua gestão e acompanhamento em meio digital, como consequência direta da aplicação dos princípios da celeridade, da atualidade e da eficiência. Além disso, é notório que as transformações sociais e tecnológicas atingem, também, a administração pública. Por isso, o governo deve, obrigatoriamente, buscar se modernizar para oferecer o melhor serviço e se aproximar-se dos cidadãos.

Assim a tecnologia presente na vida das pessoas, passa a fazer parte do cotidiano da administração pública, e, dessa forma, suas ações devem, notadamente, priorizar o uso das novas tecnologias para democratizar o acesso à informação, ampliar

16 BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 out. 2018.

17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 111

a participação popular, reduzir a burocracia e aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas prestadas, iniciativas que contribuirão decisivamente para o fortalecimento de uma administração mais responsável, célere e eficaz.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 out. 2018.

BRASIL. **Decreto nº 8539**, de 08 de outubro de 2015. Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 out. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8539.htm>. Acesso em 05 nov. 2018.

BRASIL. Emenda Constitucional nº19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e norma da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de unidades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasil, 1998, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Ecm19.htm>. Acesso em 12 out. 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 20 nov. 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995**. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm>. Acesso em: 10 dez. 2018.

CARVALHO, A.I. et al. **Escolas de governo e gestão por competências: mesa-redonda de pesquisa-ação**. Brasília: ENAP, 2009.

DE CICCO, Francesco. “**Sistemas Integrados de Gestão: Agregando Valores aos Sistemas ISO 9000**”, QSP, São Paulo, 2004. p.21.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 111

FRAGA, C. G. S.; MARTINS, J. R.A (in) **eficácia do estágio probatório do servidor público como instrumento de avaliação da Administração Pública Municipal**. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, v. 1, n. 10, 2, p. 5991-6031, 2012.

LUCENA. M. D. da S. **Avaliação de Desempenho**. São Paulo: Atlas. 1992.

MEDUAR. Odete. O Direito Administrativo Moderno. 10.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

MEIRELES. Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 30 ed. São Paulo: Malheiros. Editores, 2005.

MEIRELES. Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

MODESTO, P. **Estágio Probatório: Questões Controversas**. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 12, p. 1-28, mar. 2002.

SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho. Fundamentos jurídicos que tornam obrigatória a tramitação eletrônica dos processos administrativos e a disponibilização na rede mundial de computadores (internet). In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). **Tecnologia jurídica & direito digital**: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 167-190.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Resolução nº 023/2015-CONSUNI, de 25 de nov de 2015**. Disponível em: < <https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/PlanoGeralDeAcaoGes-tao2015-2019.pdf> >. Acesso em: 03 out. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Resolução nº 008/2006-CONSAD, de 20 de abril de 2006**. Disponível em: < <http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/20120681468ec7108320565bba3b630bd/res0082006.doc> >. Acesso em: 03 out. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Manual de Instrução do Programa de Tutorização Organizacional de Servidores Técnicos-Administrativos**. Disponível em: <http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2012050067c9ab1236063ebfcf5cf1e12/5_ManualdeInstrucaoTA.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018.

A percepção do novo servidor técnico-administrativo da UFRN quanto ao uso ético e transparente de dados públicos

Jazon Paulino Lisboa Moreira

Sergio Luis Rizzo Dela Savia

CONTEXTUALIZAÇÃO

A ética no serviço público tem sido muito discutida nos últimos tempos, devido aos escândalos de corrupção que estão sendo descobertos com mais intensidade nos últimos anos e divulgados nas mídias, principalmente nas digitais.

É comum vermos notícias de algum agente público agindo contra atitudes esperadas para uma pessoa ocupante de cargo, emprego ou função pública, como corrupção, fraudes, nepotismo e negligência no serviço, prejudicando o bem comum e sem atentar a moralidade pública, um dos princípios da administração pública, sendo ações típicas do patrimonialista.

Desta forma, para um melhor controle da administração pública, todos os dados que são de ordem pública devem ser divulgados para o público, tendo em vista que essas informações são de interesse comum, sendo uma forma de o cidadão se tornar um fiscalizador dos atos do Governo, e a tecnologia vêm auxiliando muito nesse sentido.

As Tecnologias da Informação – TICs são usadas cotidianamente no serviço público, o qual teve que acompanhar as transformações ligadas a tecnologia para alcançar a eficiência e se conservar a transparência, conforme Nascimento, Freire e Dias, “o processo de redemocratização estimulado pela constituição de 1988 instigou o aumento da pressão da sociedade por maior transparência e qualidade nos serviços prestados”. Desta forma, foi necessário achar mecanismos de manter a sociedade participante no processo de fiscalização.

A ética no serviço público está ligada a transparência pois cabe ao órgão e agentes públicos oferecerem informações de forma clara, pois agindo transparentemente o estado está oferecendo um retorno ao cidadão sobre os atos praticados, segundo Cruz et al. apud Esco-

bar, “o avanço tecnológico favorece a transparência, e o agir transparente favorece a ética, assim, o avanço tecnológico pode contribuir para o aumento da transparência das ações da gestão pública”.

Dentro desse contexto, cabe ao serviço público se enquadrar nesse cenário que exige que as informações sejam disponibilizadas abertamente ao público, salvo aquelas informações imprescindíveis à segurança do estado e da sociedade, como disserta a Constituição Federal de 1988.

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Cabe ressaltar que existem condutas contra a inviolabilidade de segredos contidas no Código Penal Brasileiro, que preveem algumas penas contra a viabilidade de dados reservados em lei da Administração Pública, ou que causem danos a terceiros.

Além do mencionado acima, é de estrita observância de outras normas legais como a lei nº 8.112/90; lei nº 8.429/92, Decreto nº 1.171/94, Lei nº 8.027/90, entre outros dispositivos que dissertam sobre condutas, restrições, penas e demais atos dos servidores públicos referentes a ética no serviço público.

Dentro dessa perspectiva, neste trabalho será proposto um estudo acerca da percepção que os novos servidores técnicos-administrativos da UFRN têm sobre a ética na administração pública ligada ao governo digital e dados abertos, e debater sobre a questão do cidadão como fiscal da lei e da prestação dos serviços de forma ética e eficiente.

Objetivo geral

Estudar a percepção do novo técnico-administrativo da UFRN (ingressantes entre 2015 e 2018), quanto a ética ligada ao tema governo digital e dados abertos

Objetivos específicos:

- Realizar um estudo qualitativo e quantitativo sobre a percepção dos novos servidores Técnico Administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte acerca da transparência digital ligada a ética no Serviço Público;
- Observar através de perguntas abertas e fechadas o entendimento dos novos servidores técnicos-administrativos sobre dados abertos ligado a ética no serviço público;
- Fomentar a consciência ética do novo servidor Técnico Administrativo em relação ao comportamento ético e transparente dentro da instituição, ampliando seu campo de visão em relação ao tema proposto;
- Fortalecer e enriquecer o campo de pesquisas na área.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA.

É corriqueiro vermos noticiado nos jornais algumas manchetes que tratam do serviço público, porém, a maioria não traz notícias positivas, grande parte trata de corrupção, nepotismo, funcionários que não comparecem ao trabalho, ou comparecem ao local de trabalho, batem o ponto e vão fazer outras atividades que não estão relacionadas às suas atribuições dentro da administração pública, e a existência de funcionários fantasmas.

Nesse tipo de atitude podemos observar resquícios do modelo patrimonialista de administração, o qual o público e o privado na maioria das vezes se confundia, segundo Paludo, são algumas características do modelo Patrimonialista a confusão entre a propriedade privada e a propriedade pública; endeusamento do soberano; corrupção e nepotismo; ausência de carreiras administrativas; descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais; entre outros.

Esse tipo de atitude não deve fazer parte das atitudes dos órgãos e agentes do serviço público, e desde a reforma burocrática, que foi a segunda reforma da administração pública brasileira, essas atitudes vêm sendo combatidas.

Para Paludo, a administração burocrática foi implantada no Brasil para dar mais impessoalidade e eficiência ao serviço público e afirma que:

A Burocracia corresponde a uma instituição Administrativa (pública ou privada) cujos pilares são o caráter legal das normas e procedimentos, a racionalidade, a formalidade etc. Caracterizava-se como uma forma superior de organização capaz de realizar, de modo eficiente e em grande escala, as atividades administrativas, através do trabalho de muitos funcionários organizado de maneira racional. É um tipo de organização que proporciona a profissionalização de seus funcionários, visto que se orienta pelos princípios da competência e da meritocracia, não se prestando a favores pessoais de indicação política (típicos do patrimonialismo).

Esse tipo de administração foi substituído pelo modelo gerencial, pois com a crise entre a década de 80 e 90, o governo buscou rever as práticas do seu modelo de gestão, no sentido de solucionar os problemas fiscais, inflação que crescia exageradamente, incertezas no cenário político, sendo necessário achar um meio de intervir na economia.

Devido a isso, em 1995 foi lançado o Plano Diretor da Reforma do Estado que implementou no Brasil o modelo de gestão Gerencial, a fim de se alcançar respostas mais rápidas em relação ao desenvolvimento econômico e social do país, o qual não estava encontrando na rigidez do modelo burocrático uma forma de contornar a situação a qual se encontrava.

A primeira tentativa de implementar a administração gerencial no Brasil foi em 1967, através do Decreto-Lei nº 2006, que “Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências”.

O decreto mencionado promoveu uma profunda descentralização das atividades do estado, o qual regulamenta a criação de Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, e também trazendo princípios como: Planejamento; Coordenação; Descentralização; Delegação de Competência, e; Controle.

Contudo, a inserção do Gerencialismo nesse período não obteve sucesso. De acordo com Pereira, o Decreto-Lei nº 200 pode ser considerado como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Porém, não houve sucesso da implantação do modelo gerencial nesse período. Esse mesmo autor afirma que:

A reforma administrativa embutida no Decreto-Lei 200 ficou pela metade e fracassou. A crise política do regime militar, que se inicia já em meados dos anos 70, agrava ainda mais a situação da administração pública, na medida que a burocracia estatal é identificada com o sistema autoritário em pleno processo de degeneração.

O Modelo gerencial se estabeleceu no Brasil em 1995, com a Reforma do Estado, período em que o país estava sofrendo as consequências da hiperinflação, tornando-se imprescindível uma reforma administrativa. Souza e Costa afirmam que:

A Reforma Gerencial trouxe uma nova perspectiva em relação ao cidadão, transformando-o e reconhecendo-o como principal beneficiário das ações do Estado. A ênfase na participação representa o envolvimento de todos os servidores na melhoria do serviço público, e no compromisso de cooperação entre gerentes e gerenciados para o aperfeiçoamento contínuo, buscando assim a satisfação do cidadão, foi adotado como instrumento de reforma da administração pública brasileira que levou em conta a dimensão política para levar as organizações públicas a atender as necessidades dos cidadãos-cliente.

Apesar dessa última reforma, o modelo burocrático não foi substituído pelo gerencial, pois o mesmo se apoiava em conceitos da administração burocrática. Pereira afirma que o modelo gerencial tem que ser desenvolvido sobre o burocrático, aproveitando suas conquistas, pontos positivos demonstrados, e eliminar o que não serve.

A ÉTICA LIGADA AO E-GOV E TRANSPARÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO

A Constituição Federal de 1988, no seu Art. 37, Caput. traz princípios explícitos que norteiam as ações da administração pública, são eles: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e

Eficiência (LIMPE), devendo o agente público observar todos eles, sendo cabível de sanção administrativa, penal e civil, em caso de descumprimento dos mesmos.

Contudo, o princípio que mais está associado a dados abertos é o da publicidade, que dá aos atos públicas a eficácia necessária para a sua consecução. De acordo com Alexandrino e Paulo, a publicidade não está vinculada a validade do ato, mas a sua eficácia, isto é, enquanto não publicado, o ato não está apto a produzir efeitos.

Ligando-se ao exposto acima é identificada a ética no sentido levar ao cidadão o conhecimento dos atos que o governo pratica, seja ele a União, Estado, Municípios ou o Distrito Federal.

Caracas relata que:

A questão ética é um fator imprescindível para uma sociedade e por isso sempre encontramos diversos autores tentando definir o que vem a ser ética e como ela se interfere em uma sociedade [...] A questão da ética pública está diretamente relacionada aos princípios fundamentais, sendo estes comparados ao que chamamos direito, de norma fundamental, uma norma hipotética com premissas ideológicas e que deve reger tudo mais o que estiver relacionado ao comportamento humano em seu meio social, aliás, podemos invocar a Constituição Federal. Esta ampara os valores morais da boa conduta, ou seja, na Administração Pública contém princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Desta forma, a agir ético deve respeitar os princípios constitucionais, sendo a publicidade uma forma de trazer ao público os atos da administração, o que torna a transparência dos serviços essencial para o controle eficaz da coisa pública.

A transparência no Brasil foi ser discutida tardiamente, em 2009 com a lei da transparência (Lei Complementar 131/2009), e logo em seguida com a lei de acesso a informação (Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011). Segundo Batista et al. a transparência no Brasil veio ser debatida muito tarde, se comparado a outros países, como o exemplo da Suécia que definiu sua lei de acesso a informação em 1766.

Conforme Batista et al., “A Lei da Transparência Pública obrigou a divulgação de informação de gastos públicos em plataformas de Internet: os portais da transparência nas três esferas de governos, bem como em quaisquer organismos que receba verbas públicas”.

O Brasil conta com portais na internet para que o cidadão possa se inteirar sobre os atos do poder público. A nível federal, por exemplo, tem-se o Portal da Transparência, e o Projeto DadosGovBr,

Com esses mecanismos é um dos objetivos se tornar os atos públicos e se reduzir os altos índices de corrupção no país, pois torna a população fiscalizadora de atos do governo. Ressalta-se que o indicador Global Open Data Index, destaca o Brasil como um dos países mais transparentes do mundo. Isso é um ponto positivo tendo em vista que o Brasil tem ganhado destaque nas mídias nacionais e internacionais referente ao alto nível de casos de corrupção.

Toda essa temática de Dados abertos, E-gov e transparência, está ligada também ao modelo de administração gerencial que tem como premissa transforma os atos da administração mais eficiente, tornando a disponibilização de dados mais ligeira ao cidadão, ao mesmo tempo que revolucionou a forma de oferecer os serviços públicos, seja ele para o público interno ou externo, como por exemplo os Sistemas Integrados de Gestão (SIGs) utilizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que disponibilizam dados de diversas naturezas para o público.

Desta forma a ética no serviço público está intimamente ligada a transparência das informações, pois o Governo não pode fugir da responsabilidade de informar ao cidadão sobre os atos que impactam a vida da população, que paga seus impostos e contribuem para o eficiente andamento dos serviços públicos.

GOVERNO ELETRÔNICO NA UFRN E A ÉTICA (PROPOSTA DA PESQUISA)

A proposta desse projeto é fazer uma pesquisa exploratória, descritiva, com o subtipo estudo de caso, acerca da percepção que os servidores Técnicos Administrativos da UFRN, ingressantes entre 2015 a 2018, sobre a transparência de dados dentro da Universidade, e dentro desse contexto estudar a relação que os mesmos podem

atribuir a ética na relação da transparência de dados digitais para o público interno e externo.

A proposta de público alvo da pesquisa é novos servidores Técnicos Administrativos da UFRN, ingressantes entre 2015 a 2018 foi escolhido devido ao entendimento de que os servidores técnicos administrativos trabalham diretamente com a atividade meio da Universidade, como por exemplo: licitações e contratos, atendimento ao público, entre outros, assim como são detentores da guarda de informações privilegiadas, como senhas e permissões restritas de acesso aos sistemas utilizados na UFRN, como por exemplo os Sistemas Integrados de Gestão (SIGs), assim como a Plataforma Sucupira, dentre outros.

Destarte, cabe ressaltar que de acordo com dados do Sistema Integrado de Recursos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – SIGRH/UFRN, ingressaram na UFRN cerca de 555 servidores Técnicos Administrativos, desde 2015 até março de 2018, 28% do total de servidores ingressantes no mesmo período (2003 servidores), que inclui Técnicos Administrativos e Docentes efetivos, visitantes, temporários e substitutos. Diante disso, pode-se constatar que a maior porcentagem de servidores ingressantes são Técnicos-administrativos.

As etapas desta pesquisa compreenderão: Apuração do referencial bibliográfico; levantamento dos servidores técnicos administrativos ingressantes entre 2015 e 2018; envio do convite de participação da pesquisa e o formulário da pesquisa para esses mesmos servidores; apuração e análise dos dados; Início da escrita da dissertação; Apresentação do trabalho a banca de qualificação; revisão bibliográfica final do trabalho escrito da dissertação; escrita final da dissertação; defesa da Dissertação.

Para fundamentar a pesquisa será utilizado pesquisas bibliográficas, sendo utilizados livros, artigos, periódicos e jornais, encontrados na internet e na Biblioteca Central da UFRN, dados apurados através do Sistema Integrado de Recursos Humanos da UFRN-SIGRH/UFRN e também em colaboração com a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas/PROGESP, em consonância com a Superintendência de Informática da UFRN-SINFO/UFRN.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. Método, 2008;
- BATISTA, Nadine Victor; BATISTA, Gisele Victor; GOMES, Nicole Victor. A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OS DESAFIOS DA ACESSIBILIDADE: A INTERNET ENQUANTO INSTRUMENTO DE APROXIMAÇÃO ENTRE ESTADO E CIDADÃO NA ERA DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. Seminário de Ciências Sociais Aplicadas, v. 5, n. 5, 2016;
- BRASIL. Decreto-lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 de fevereiro de 1967. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0200.htm>>. Acesso em: 13.01.2007;
- BRASIL. **Constituição** (1988). **Constituição** da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado **Federal**: Centro Gráfico, 1988. 292 p
- ESCOBAR, Cláudia Diniz. Transparência e ética na gestão pública no Brasil: tópicos para reflexão. 2014;
- GLOBAL OPEN DATA INDEX. 2016. Disponível em: <http://index.okfn.org/place>. Acesso em 21/12/2018;
- NASCIMENTO, S.G.V., FREIRE, G.H.A., e DIAS, G.D.. A tecnologia da informação e a gestão pública. MPGOA 1(1): 167–82. 2012;
- PALUDO, Augustinho Vicente. Administração pública. Elsevier, 2010;
- PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço público, v. 47, n. 1, p. 7, 1996.

Trabalho, serviço público e inserção de gênero

Acácia Jéssica Maia de Moura

Patricia Borba Vilar Guimarães

Adriana Carla Silva de Oliveira

INTRODUÇÃO

Realizar uma reflexão ampla sobre gênero coloca-se como um desafio ainda nos dias de hoje quando ainda vivemos uma sociedade que dita desde o que devemos vestir até maneira como devemos nos portar, o lugar que devemos ocupar nessa sociedade e/ou papéis que devemos exercer, como algo natural e intrínseco a homens e mulheres. Realizar uma leitura crítica sobre essa realidade ainda tão presente é desnaturalizar tais normas, compreendendo-as como uma construção histórico-social. A cultura machista instituída e legitimada em nossa sociedade é responsável por repressões que atingem homens e mulheres, sejam por atos de violência física, sejam por violações subjetivas. Tais normas são, na maioria dos casos, reproduzidas sem que haja questionamentos ou mesmo uma reflexão crítica sobre elas. Essa reprodução acontece entre os grupos sociais, mídias e ainda por meio das instituições de ensino. Expectativas desde que cor de roupa usar, ou mesmo que profissão seguir, são circunscritas pela condição de gênero, que cerca e limita alternativas e potencialidades a medida que delimitam o que próprio de homens e mulheres. À medida que se preestabelecem tais papéis, os estímulos ficam limitados apenas ao que é próprio do gênero, e há que se citar, é sempre o gênero biológico que é levado em consideração apenas, ignorando-se a identidade de gênero desses indivíduos.

Ao transcender esses ideais pré-estabelecidos, avançamos na compreensão de que o gênero não predetermina as competências dos indivíduos. Nesse artigo, debateremos como os papéis de gênero interferem na formação de meninos e meninas e como essa formação se relaciona com o desenvolvimento de capacidades e escolhas profissionais, além de delimitar espaços a serem ocupados por cada gênero no mercado de trabalho.

Ressaltamos ainda o papel central do trabalho no desenvolvimento humano e via de reconhecimento social e intelectual. Por fim, apresentamos essa realidade dentro do serviço público, evidenciada pelo advento de novas tecnologias e a necessidade de fomento da formação de meninas e jovens nas áreas tecnológicas para que possam assim se inserir nos mais diversos espaços sem que seu gênero determine limites de atuação.

PAPÉIS DE GÊNERO E O MUNDO DO TRABALHO

Em nossa sociedade discutimos ainda nos dias de hoje a condição de desigualdade entre gêneros. Historicamente, papéis específicos foram atribuídos a homens e mulheres. A persistente condição de desigualdade evidenciada especialmente no mundo do trabalho, onde mulheres recebem salários menores e tem menos oportunidade de crescimento e ascensão profissional evidencia tal desigualdade¹⁸. A predeterminação estabelecida sobre a capacidade de homens e mulheres desenvolverem determinadas atividades tem origem nos papéis de gênero estabelecidos por uma sociedade culturalmente machista. Ao nascer, meninos e meninas recebem diferentes estímulos a partir das expectativas lançadas sobre os mesmos sobre os papéis que cada gênero deve assumir. Meninos são constantemente estimulados a partir de jogos e brincadeiras que envolvem o desenvolvimento de capacidades motoras e intelectuais, enquanto meninas tem suas brincadeiras associadas a atividades reconhecidamente de caráter feminino, como bonecas, fogõezinhos, etc. Tais estímulos recebidos durante o crescimento são determinantes para o desenvolvimento de capacidades que poderão determinar no futuro afinidades, facilidades e escolha dos caminhos profissionais a serem seguidos.

A ideia de que o gênero determina os talentos natos dos indivíduos estabelece uma ideia de que homens são naturalmente mais habilidosos nas áreas conhecidas como exatas ou carreiras STEM (*Science, technology, engineering and math*) e mulheres teriam melhores

18 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Diretoria de Pesquisas. Condenação de População e Indicadores Sociais. **Estatísticas de Gênero: Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010**. – Rio de Janeiro. 2014. Disponível em <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88941.pdf>>. Acesso em 23.nov.2018

capacidades nas áreas relativas as ciências humanas ou de saúde (especialmente pelo caráter de cuidado atrelado a esta). Em pesquisa apresentada no V Congresso Brasileiro de Informática na Educação, Posser e Teixeira¹⁹ apontam que, na área da Tecnologia da Informação apenas 25% dos postos são ocupados por mulheres, resultado do que eles apresentam como principais causas da baixa existência de mulheres nesse meio o preconceito, o estereótipo e a falta de estímulo na infância e juventude (que impacta diretamente na escolha profissional). Nessa medida, podemos perceber que a formação inicial, bem como os estímulos praticados durante a infância e juventude podem determinar o desenvolvimento de capacidades profissionais no futuro.

Sobre a formação de meninos e meninas Simone de Beauvoir²⁰ nos aponta que:

Assim, a passividade que caracterizará essencialmente a mulher “feminina” é um traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro pretender que se trata de um dado biológico: na verdade, é um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade. A imensa possibilidade do menino está na maneira de existir para outrem encorajando-o a pôr-se para si. (...) Empreende, inventa, ousa. (...) Ao contrário, na mulher há, no início, um conflito entre a sua existência e seu “ser-outro”. (...) Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos exerce sua liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito.

Desde muito cedo, portanto, meninos e meninas recebem diferentes formações a partir das quais nascem expectativas específicas para cada gênero sobre o papel que ocupará na sociedade. O preconceito surge e se fortalece na medida em que essas expectativas são de-

19 POSSER, C. V.; TEIXEIRA, A. C. Mulheres que aprendem informática:: Um estudo de gênero na área de TI. In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE 2016), 2016, Uberlândia - MG. **Anais do XXII Workshop de Informática na Escola...** [S.l.: s.n.], 2016. p. 707-716. Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/view/6878/4756>>. Acesso em: 22 out. 2018.

20 BEAUVOIR, S. de. **O segundo Sexo: A experiência Vivida**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1949. P. 22.

safiadas em alguma medida. No mundo do trabalho tais expectativas tornam-se ainda mais claras, evidenciando-se pela maioria massiva de homens ocupando posto de trabalho relativos as carreiras STEM, e nos nossos dias no desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, especialmente referente a Tecnologia da Informação – TI, este mercado vem se expandindo nos mais diversos âmbitos, tanto no setor privado, quanto no setor público. Se faz mister, portanto, a inserção igualitária de gênero para que mulheres possam ocupar lugar de relevância no mundo do trabalho, categoria central na vida dos indivíduos na nossa sociedade. Para tanto, é necessário um olhar dedicado a formação dessas jovens no sentido de possam explorar suas capacidades desde cedo e passem a ocupar os espaços ainda hoje reconhecido por muitos como lugar de homem.

O movimento feminista vem trazendo à tona pautas relevantes sobre o debate de gênero, bem como fortalecendo a luta por igualdade nos âmbitos da vida pública e privada. A partir dessas reivindicações, como apontado por Beauvoir²¹ “(...) hoje, graças às conquistas do feminismo, torna-se dia a dia mais normal encorajá-las a estudar, a praticar esporte; mas perdoam-lhe mais do que ao menino o fato de malograr; tornam-lhe mais difícil o êxito.” Nas áreas reconhecidas como áreas masculinas, mulheres são subestimadas e enfrentam preconceitos sobre suas capacidades. Para além de “largar em desvantagem” diante da falta de estímulos durante a infância e juventude, meninas e mulheres são desafiadas a provar sua competência em desenvolver-se em áreas que não pertencem ao mundo feminino.

Tal panorama nos leva a conclusão de que ainda nos dias de hoje, em pelo século XXI, faz-se necessário afirmar a luta pela igualdade de gênero nos mais diversos âmbitos, especialmente em uma sociedade onde o reconhecimento social se dá pelas vias do trabalho e do sucesso profissional.

TRABALHO: FUNDANTE DO SER SOCIAL, VIA DE LIBERTAÇÃO

O trabalho ocupa, historicamente, lugar de centralidade da vida humana, permanecendo na atualidade como grande impulsionador

21 BEAUVOIR, S de. Pg. 23

do desenvolvimento humano. No labor, os indivíduos encontram vias para sua reprodução material e social, além de desenvolver suas capacidades intelectuais. O caráter essencialmente social do trabalho é ponto de partida para compreensão sobre a vida em sociedade, bem como sobre o desenvolvimento da sociabilidade humana. Karl Marx²² nos traz a compreensão de que é o trabalho mediador essencial da relação homem/natureza e assinala assim, a passagem do ser meramente biológico para o ser social. Na interação com a natureza externa mediada pela transformação das mais diversas matérias-primas em recursos úteis à sua própria vida, o ser humano modifica sua própria natureza, desenvolvendo potenciais nela antes adormecidos. O trabalho demarca ainda a condição de humano a partir do seu caráter essencialmente teleológico, como argumenta o referido autor, “o que distingui, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, idealmente.”²³ Em sua interação teleológica com a natureza, os indivíduos produzem valores de uso através do metabolismo universal determinado pela sua relação com a natureza, apropriação necessária à satisfação das necessidades humanas.

Nessa medida, Holanda²⁴ afirma que “formas mais desenvolvidas da práxis humana passaram a existir desde que o trabalho se tornou social, ou seja, desde que para realizar determinadas atividades o homem passou a necessitar da cooperação de mais pessoas”. Compreende-se, portanto, que a atividade laboral é fonte de aperfeiçoamento das habilidades humanas, na mesma medida em que proporciona o desenvolvimento de sua sociabilidade. O trabalho ocupa historicamente, portanto, lugar de desenvolvimento intelectual, moral e social.

22 MARX, K. **O Capital**. Tomo I e II, trad. De Regis Barbosa e Flávia R. Kothe, São Paulo, Nova Cultura, 1996.

23 MARX, K. Pg. 298.

24 HOLANDA, M. A. B. O trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács: algumas considerações sobre trabalho e serviço social. In: **Revista Serviço Social e Sociedade**, n° 69, Editora Cortez, 2002. Pg. 14.

De acordo com Agnes Heller²⁵, o ser humano se objetiva na vida cotidiana das mais diversas formas, através do trabalho, da linguagem, dos hábitos, da política, etc. Dialogando com a obra marxista, a autora apresenta o trabalho como via de objetivação humana no desenvolvimento de sua sociabilidade, pela universalidade, pela consciência e pela liberdade, apresentando-se ainda como forma de realização das potencialidades natas do ser humano. Pelas vias do trabalho garante-se a auto reprodução humana na medida em que, de maneira indireta, reproduz-se a sociedade. Estabelece-se, portanto, uma relação direta entre a reprodução física e o desenvolvimento das mais altas formas de genericidade.

Nesse sentido, podemos concluir que por meio do trabalho os indivíduos desenvolvem suas capacidades, bem como sua sociabilidade, além de prover suas necessidades materiais. Isso atribui ao trabalho lugar de centralidade na vida humana, o que não é menos determinante nas relações de gênero. De acordo com Beauvoir, mesmo após conquistar algumas liberdades cívicas (como o direito ao voto, por exemplo), tais liberdades permanecem abstratas a medida que não são acompanhadas de autonomia econômica.

Beauvoir²⁶ afirma que

Foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem; só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta. Desde que ela deixa de ser parasita, o sistema baseado em sua dependência desmorona; entre o universo e ela não há mais necessidade de um mediador masculino. (...) produtora, ativa, ela reconquista sua transcendência; em seus projetos afirma-se concretamente como sujeito; pela sua relação com o fim que visa, com o dinheiro e os direitos que se apropria, põe a prova sua responsabilidade.

Dentro do contexto de uma sociedade capitalista, o trabalho apresenta-se como principal mercadoria e mecanismo de geração de

25 HELLER, A. **O cotidiano e a história**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 3. ed., 1989.

26 BEAUVOIR, S. de. Pg. 449.

valor (Cardoso²⁷). Nessa medida, ao adentrar o mundo do trabalho, a mulher desloca seu lugar nessa sociedade, ainda que de forma iminente.

A inserção nos diversos espaços de trabalho é ainda um limite imposto às mulheres, que enfrentam desafios desde sua formação familiar à sua formação formal. Os papéis de gênero atribuídos à mulher e ao feminino determinam limites claros sobre quais lugares ela pode ocupar dentro do mercado de trabalho. A expansão do uso da tecnologia nas mais diversas áreas evidencia fortemente essa realidade. O serviço público, que vem se propondo a avançar tecnologicamente (como apontaremos a seguir) é também espaço de afirmação da presença da mulher enquanto sujeito capaz de se desenvolver nas mais diversas áreas.

REFORMA GERENCIAL DO ESTADO, SERVIÇO PÚBLICO E INSERÇÃO DE GÊNERO

O Estado, apresentado aqui como sistema constitucional-legal atrelado a uma administração pública que garanta sua viabilização, sofreu diversas reformas ao longo de sua história. É a partir da revolução capitalista e o advento do Estado moderno que se estabelece considerável preocupação com o progresso econômico, político, social e ambiental das nações, como afirma Bresser-Pereira²⁸. Posteriormente, com a democratização do Estado, surgem outras preocupações que serão agregadas as primeiras, tais como liberdade dos cidadãos, bem-estar econômico, justiça social e por fim, a proteção ambiental, configurando-se como principais objetivos das sociedades modernas. O Estado assume, portanto, o papel de matriz institucional reguladora do mercado e das demais instituições por meio das quais buscará atingir os objetivos supracitados.

Bresser-Pereira relata ainda que a partir da segunda metade do século XX, o Estado liberal dá lugar ao Estado social como estratégia

27 CARDOSO, L. A. **A categoria trabalho no capitalismo contemporâneo**. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 23, n. 2 São Paulo, novembro 2011. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a11>>. Acesso em: 25 de abril 2018. Pg. 266.

28 BRESSER-PEREIRA, L. C. É o Estado capaz de se autorreformular? **Desigualdade & Diversidade – Dossiê Especial**, [S.l.], p. 11-20, segundo semestre de 2011.

de manejo para aumentar a qualidade de vida e diminuir as desigualdades intrínsecas ao capitalismo (sistema que pressupõe crises cíclicas e concentração de riquezas) através do investimento em serviços públicos gratuitos (educação, saúde pública, assistência social e previdência universal) garantindo assim considerável crescimento na qualidade de vida da população. Os extensos serviços sociais assumidos pelo Estado reconfiguram seu papel, ampliando sua função de garantidor da lei, somando ela a responsabilidade no atendimento dos referidos serviços de forma eficiente. O Estado social passa a exigir, assim, uma reforma gerencial. No Brasil, essa reforma tem início no ano de 1995.

O Estado social, que se caracteriza por ser um Estado grande no tocante a carga tributária e pequeno em termos de número de servidores públicos, deve ser composto pelo coletivo de políticos eleitos e um seleto grupo de servidores públicos de alto nível e muito bem remunerados. Os mesmos assumirão o papel de definir políticas públicas, além de administrar o patrimônio público e os recursos arrecadados pelo Estado. O controle social é também característica essencial no contexto da reforma gerencial no sentido de garantir que a sociedade tenha muitas maneiras de controlar os serviços prestados pelo Estado, sobretudo dentro do quadro da democracia.

Em comunicação ao Comitê de Especialistas em Administração Pública do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Bresser-Pereira²⁹, ao debater o papel da administração pública para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODMs), explana que a capacidade do Estado pode ser mediada pelas instituições políticas democráticas que legitime o governo e o império da lei; pela qualidade de suas políticas públicas; e por fim, pela qualidade da administração pública.

Dentro do contexto de reforma gerencial, da demanda por uma maior eficiência do Estado e melhoria da qualidade dos seus serviços mediante os diversos objetivos que lhe são impostos na atualidade,

29 BRESSER-PEREIRA, L. C. **Princípios práticos de administração pública**. Comunicação à Quarta Reunião Anual do Comitê de Especialistas em Administração Pública do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas. Nova Iorque, 6 de abril de 2005.

surge em 2016 o programa Governo Digital (eGOV)³⁰, que baseia suas ações no uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) como meio de democratização do acesso à informação, fortalecendo o controle social (já proposto pelo modelo de gestão gerencial), bem como aprimoramento da qualidade dos serviços públicos. As diretrizes do Governo Eletrônico apontam para um aperfeiçoamento da participação e controle social, fortalecimento de serviços públicos disponibilizados em meio digital e inovação no serviço público.

A partir do que é proposto pelo eGOV e a afirmação de Bresser-Pereira³¹ sobre a necessidade de um serviço público composto por um pequeno grupo de servidores de alto nível, surge o questionamento sobre quem ocupará, no tocante as questões de gênero, essas funções. Como já apontamos aqui, meninos e meninas tem formações distintas a partir das expectativas geradas sobre seu gênero, e essa formação, como concluiu a pesquisa realizada por Posser e Teixeira³² aponta que “os principais motivos que concorrem para que a área de TI seja predominante masculina são: o estereótipo criado e a falta de estímulos na infância e/ou juventude.”

Em pesquisa sobre a taxa de atividade laboral entre homens e mulheres, o IBGE³³ destaca que no censo demográfico 2010 apenas 54,6% das mulheres encontravam-se inseridas no mercado de trabalho. Entre os homens o percentual apresentado é de 75,7%. A pesquisa não aponta, entretanto, as áreas de atuação predominantemente ocupadas por homens e/ou mulheres. Todavia, o estudo realizado por Posser e Teixeira assinala que na área de TI, apenas 25% das vagas são ocupadas por mulheres. A partir da evidente expansão do uso da tecnologia nos diversos espaços de trabalho, e o eGOV como exemplo dessa expansão no serviço público, faz-se necessário um

30 BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-19. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Tecnologia da Informação – Brasília. MP, 2016

31 BRESSER-PEREIRA, L. C. Pg. 04.

32 POSSER, C. V.; TEIXEIRA, A. C. Pg. 715

33 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. **Estatísticas de Gênero: Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010.** – Rio de Janeiro. 2014. Disponível em <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88941.pdf>>. Acesso em 23.nov.2018

olhar para formação de meninas e jovens que deverão ocupar esses espaços em regime de igualdade diante dos homens, especialmente em uma sociedade que ainda prega a meritocracia. Através de ferramentas de inclusão e acesso a linguagens relativas as áreas STEM é possível estimular o contato e o desenvolvimento de afinidades para que essas meninas e jovens possam explorar suas capacidades para além do que é comumente esperado delas enquanto talentos natos. Espera-se com essas medidas, proporcionar o aprofundamento do interesse pelas áreas citadas e consequentemente uma maior inserção nos espaços tanto de formação, como do próprio mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução do Estado, no sentido de promover eficiência, não pode ignorar a participação feminina nas áreas STEM, o que se viabiliza através do estímulo ao desenvolvimento de vocações que não são esperados, em regra, das mulheres.

O mercado de trabalho, além de extremamente seletivo, por vezes promove seleções preconceituosas que sonham às mulheres postos ligados à ciência e tecnologia, o que transcende a dificuldade de ascensão na carreira e a remuneração inferior.

No âmbito público, iniciativas que visem à democratização do acesso à área de exatas, no que diz respeito às questões de gênero, demandam um estímulo no momento do desenvolvimento de habilidades profissionais das jovens, o que se processa ainda na infância.

REFERÊNCIAS

- BEAUVOIR, S. de. **O segundo Sexo: A experiência Vivida**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1949.
- BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-19. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Tecnologia da Informação – Brasília. MP, 2016
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE. Diretoria de Pesquisas. Condensação de População e Indicadores Sociais. **Estatísticas de Gênero: Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010**. – Rio de Janeiro. 2014. Disponível em <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv88941.pdf>>. Acesso em 23.nov.2018
- BRESSER-PEREIRA, L. C. É o Estado capaz de se autorreformular? **Desigualdade & Diversidade – Dossiê Especial**, [S.l.], p. 11-20, segundo semestre de 2011.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. **Princípios práticos de administração pública**. Comunicação à Quarta Reunião Anual do Comitê de Especialistas em Administração Pública do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas. Nova Iorque, 6 de abril de 2005.
- CARDOSO, L. A. **A categoria trabalho no capitalismo contemporâneo**. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 23, n. 2 São Paulo, novembro 2011. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a11>>. Acesso em: 25 de abril 2018.
- HELLER, A. **O cotidiano e a história**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 3. ed., 1989.
- HOLANDA, M. A. B. O trabalho em sentido ontológico para Marx e Lukács: algumas considerações sobre trabalho e serviço social. In: **Revista Serviço Social e Sociedade**, nº 69, Editora Cortez, 2002.
- MARX, K. **O Capital**. Tomo I e II, trad. De Regis Barbosa e Flávia R. Kothé, São Paulo, Nova Cultura, 1996.
- POSSER, C. V.; TEIXEIRA, A. C. Mulheres que aprendem informática:: Um estudo de gênero na área de TI. In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE 2016), 2016, Uberlândia - MG. **Anais do XXII Workshop de Informática na Escola...** [S.l.: s.n.], 2016. p. 707-716. Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/view/6878/4756>>. Acesso em: 22 out. 2018.

Processos administrativos à luz do governo eletrônico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Adson Araceli Alves Dantas
André Morais Gurgel

São diversos os normativos jurídicos que fundamentam a importância da eletronização dos processos e procedimentos nas instituições públicas, os quais vêm desde a última Carta Constitucional Democrática com seus princípios de publicidade e transparência. Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), Decreto Federal 8.539/2018 entre outros, são os exemplos de Fundamentos Jurídicos que tornam obrigatória a tramitação eletrônica de processos e documentos em meio eletrônico.

A ideia de transparência, publicidade, direito de informação e participação cidadã na gestão pública são os pilares que fundamentam essa nova ordem. E para uma Instituição Federal de Ensino, demandada em média por cerca de 50.000 (cinquenta mil) processos administrativos por ano, os marcos legais acima trouxeram a necessidade de readaptação com relação ao uso do papel.

A justificativa baseia-se em diversos contextos, dentre os quais, os que se relacionam com as melhorias para o serviço público, a modernização dos processos de trabalhos, e à adequação dos processos internos à legislação brasileira e à institucional; sendo esta última, àquela capitulada nas resoluções e nos Planos de Desenvolvimento Institucional.

A UFRN tem como missão o compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania, além de educar, produzir e disseminar o saber universal. Logo, o presente relato, sob a ótica da intervenção realizada nos processos burocráticos à luz do Governo Eletrônico, dialoga diretamente para eficácia dessa máxima institucional, pois envolve os seus resultados em meios a tais mudanças.

Sob o ponto de vista da legislação pátria, tem-se em destaque o Decreto Federal nº 8.539, de 9 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional. E para o atendimento das inovações trazidas, dentro da universidade, houve a ruptura do suporte físico para o eletrônico com o desenvolvimento e a incorporação da Mesa Virtual - ferramenta para criação e tramitação de processos e documentos vinculada aos Sistemas Integrados de Gestão da UFRN -.

Para além disso, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019 da UFRN, sobretudo a meta de número 17, já previa como estratégias, o a migração dos processos em eletrônicos até o final de 2019:

“(...). Aprimorar os sistemas SIG-UFRN, de modo a permitir o trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos. 5 Dar prioridade ao atendimento no formato digital de processos, requisições, memorandos e outros documentos. 6 Eliminar a aceitação e envio em papel de requisições, memorandos e outros documentos, observando o princípio da sustentabilidade ambiental (...).

O que mostra que o presente relato encontra sustentação institucional por confrontar/apresentar o que apresentou o PDI, ainda em vigor, até o final do exercício 2019.

Além disso, verifica-se viabilidade do estudo pelo livre acesso à instituição que servirá como cenário, acesso este, através de e acesso aos sistemas integrados de gestão que permite extrair os dados necessários para relatar sobre os processos administrativos da UFRN à luz do governo eletrônico.

Justifica-se, ainda, pela ótica da gestão de processos que essa temática promove, visto que tratar da migração de processo físico para eletrônico, permite identificar gargalos de fluxos antes não conhecidos, o que permite modificá-los não apenas para ajuste no processo, mas por uma lógica entrega de maior valor ao cliente final (estudantes, sociedade, servidores etc.).

E, por fim, apresentar, os primeiros resultados nos esforços institucionais realizados na implantação dos processos eletrônicos desde 9 de outubro de 2018.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os impactos no desempenho dos processos, ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós a implantação dos processos eletrônicos.

Para tanto, percorrerá pelos seguintes tópicos específicos:

- a. Relatar da implantação dos processos eletrônicos;
- c. Apresentar os resultados em dois processos críticos: Aproveitamento de Estudo e Pagamento.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Conhecer as iniciativas já existentes, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, torna mais compreensível a necessidade da eletronização dos processos administrativos. Isso porque, para controle e acompanhamento da sociedade na atuação administrativa, torna-se essencial o intermédio por meio de processos administrativos acessíveis e transparentes.

O meio físico se constitui uma barreira de acesso à informação, fiscalização e participação social. Não são poucas às vezes que cidadãos ainda esbarra em inúmeras etapas burocráticas quando se dirige à Administração Pública para satisfazer seu direito.

Alinhado um processo de mudança de modelo mental na forma de condução dos processos administrativos, o Estado Brasileiro editou uma série de normativos que defende a obrigatoriedade da tramitação eletrônica para amplo acesso ao público, como requisito da ideia de Publicidade, Eficiência, Transparência aclamados desde à Carta Constitucional.

SCHIEFLER (2016) relata que os processos físicos não suprem mais as demandas da modernidade por informações, por exigência da publicidade e transparência. Princípios que deixam o seu papel de mera formalidade e assume posição de defesa de interesses da sociedade perante administração pública.

Dentro dessa temática de Governo Eletrônico, em 2015 é publicado o Decreto Federal nº 8.359 que versou sobre a realização do processo administrativo em meio eletrônico no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O Decreto trás em seu escopo objetivos bem definidos que vem para reforçar a necessidade de transferência, muito embora

já normatizada pela Lei de Acesso a Informação. Para tanto, o citado decreto estabelece como objetivos:

I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação; e IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.

Para o universo das autarquias, encontra-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que precisou investir em infraestrutura de tecnologia da informação para atender ao disposto no Decreto, o qual estabeleceu que os órgãos e as entidades abrangidas por ele, deveriam adaptar-se no prazo de três anos, contado da data de sua publicação, para disponibilizem seus processos em meio eletrônico.

Antes mesmo da obrigatoriedade trazida pelo Decreto nº 8.539/2015, já adotava alguns processos e procedimentos na forma eletrônica por meio dos seus sistemas integrados de gestão. É nesse contexto que se amplia os módulos pertencentes ao Sistema Integrado de Processos, Administração e Contratos (SIPAC) para criação de uma ferramenta intuitiva para gestão dos processos.

Trata-se de uma ferramenta elaborada para uma melhor gestão dos processos eletrônicos de tramitação exclusivamente digital e que está pronta para implantação na UFRN. As operações cotidianas antes realizadas em processos físicos passarão a ser realizada eletronicamente na Mesa Virtual, conferindo uma nova dinâmica aos processos administrativos da Universidade, trazendo mais agilidade, economia de recursos e transparência nas ações.

É por essa razão que a Mesa Virtual tornar-se um marco de melhorias alinhado à modernização do Serviço Público. E para a UFRN, uma das pioneiras na implantação dos processos em eletrônicos, mais uma oportunidade de dispor ao seu público interno e externo uma ferramenta de otimização das informações.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - **Plano de Desenvolvimento Institucional** – PDI 2010-2019. Natal: UFRN, 2015.

Disponível em <<http://www.ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-Novas-Metas.pdf>>. Acesso em 5 dez. de 2018.

BRASIL, DECRETO nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. **Dispõe sobre a obrigatoriedade dos processos eletrônicos**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm. Acesso em 12 de dez. de 2018.

SCHIEFLER FONTES, M. Tecnologia Jurídica e Direito Digital. **Fundamentos jurídicos que tornam obrigatória a tramitação eletrônica dos processos administrativos e a disponibilização na rede mundial de computadores**, p. 167-185, 2016.